



**Conferencia de las
Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo**

Distr.
GENERAL

TD/B/RBP/94
5 de agosto de 1993

ESPAÑOL
Original: ESPAÑOL/INGLES

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO
Grupo Intergubernamental de Expertos
en Prácticas Comerciales Restrictivas
12º período de sesiones
Ginebra, 18 de octubre de 1993
Tema 4 c) del programa provisional

MANUAL DE LEGISLACION SOBRE PRACTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS

Nota de la secretaría de la UNCTAD

INDICE

	<u>Página</u>
INTRODUCCION	2
I. OBSERVACIONES DEL GOBIERNO DE ITALIA SOBRE SUS NORMAS PARA LA PROTECCION DE LA COMPETENCIA Y EL MERCADO, 10 DE OCTUBRE DE 1990	3
II. OBSERVACIONES DEL GOBIERNO DE JAMAICA SOBRE LA LEY DE COMPETENCIAL LEAL, 1993	22
III. OBSERVACIONES DEL GOBIERNO DE VENEZUELA SOBRE LA "LEY PARA PROMOVER Y PROTEGER EL EJERCICIO DE LA LIBRE COMPETENCIA", DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1991	23

Anexos

I. Italy: Rules for the Protection of Competition and the Market, 1990	28
II. Jamaica: The Fair Competiton Act, 1993	44
III. Venezuela: Ley para promover y proteger el ejercicio de la libre competencia, 1991	86

INTRODUCCION

1. En el apartado c) del párrafo 6 de la sección F del Conjunto de Principios y Normas Equitativos Convenidos Multilateralmente para el Control de las Prácticas Comerciales Restrictivas se prevé la compilación de un Manual sobre legislación en materia de prácticas comerciales restrictivas.
2. Por otra parte, en su 11º período de sesiones el Grupo Intergubernamental de Expertos en Prácticas Comerciales Restrictivas pidió a la secretaría de la UNCTAD que continuara la compilación y actualización del Manual de legislación sobre prácticas comerciales restrictivas (TD/B/39(2)/7 - TD/B/RBP/92, anexo I).
3. En consecuencia, la secretaría preparó la presente nota, que contiene los textos de la normativa legal sobre prácticas comerciales restrictivas de Italia, Jamaica y Venezuela con las observaciones correspondientes.
4. Por consiguiente, hasta la fecha la secretaría de la UNCTAD ha publicado notas con las observaciones y los textos de leyes sobre prácticas comerciales restrictivas de 22 países: Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Italia, Jamaica, Kenya, Noruega, Pakistán, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, Sri Lanka, Suecia y Venezuela.
5. En su nota del 7 de mayo de 1993, el Secretario General de la UNCTAD pidió a los Estados que todavía no lo hubieran hecho, o que después de su última comunicación hubieran promulgado nuevas leyes en materia de prácticas comerciales restrictivas o modificado las entonces vigentes, que proporcionaran a la secretaría de la UNCTAD la legislación, las decisiones judiciales y las observaciones pertinentes, ajustándose al esquema que se reproduce más abajo. (No obstante, en el caso de los Estados que adoptan leyes sobre prácticas comerciales restrictivas por primera vez, como Italia y Jamaica, las observaciones pueden no ajustarse al formato.) Para facilitar la reproducción de los textos de la legislación en más de uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, se invitó a los Estados, como lo pidió el Grupo Intergubernamental, a que, de ser posible, facilitaran los textos de su legislación en uno o más de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas.
6. La secretaría de la UNCTAD agradece a los Estados que han aportado los materiales solicitados para la compilación del Manual y pide nuevamente a los Estados que aún no lo hayan hecho que satisfagan la petición del Secretario General mencionada precedentemente.

ESQUEMA PARA LA INFORMACION DESTINADA AL MANUAL

- A. Descripción de los motivos de la promulgación de la legislación.
- B. Descripción de los objetivos de la legislación y de la evolución que han tenido desde la promulgación de la primera legislación.

- C. Descripción de las prácticas, actos o comportamientos sujetos a control, indicando para cada uno de ellos:
- a) el tipo de control, por ejemplo: prohibición absoluta, prohibición en principio, o examen caso por caso; y
 - b) el grado de control a que están sometidas las prácticas, actos o comportamientos especificados en los párrafos 3 y 4 de la sección D del Conjunto de Principios y Normas, así como cualesquiera otras prácticas, actos o comportamientos que puedan ser objeto de control. En particular, los relacionados expresamente con la defensa de los consumidores, por ejemplo la publicidad engañosa.
- D. Descripción del ámbito de aplicación de la legislación, indicando:
- a) si es aplicable a todas las transacciones de bienes y servicios y, si no lo es, qué transacciones están excluidas;
 - b) si se aplica a todas las prácticas, actos o comportamientos que tienen efectos en el país, con independencia de dónde se realicen;
 - c) si depende de la existencia de un acuerdo o de que éste se ejecute.
- E. Descripción del órgano o los órganos (administrativos o judiciales) encargados de la aplicación de la legislación, con indicación de las posibles disposiciones sobre notificación e inscripción, y facultades principales de ese órgano u órganos.
- F. Descripción de cualquier legislación paralela o suplementaria, en particular tratados o acuerdos con otros países en los que se establezca algún tipo de cooperación o procedimiento para solucionar controversias en la esfera de las prácticas comerciales restrictivas.
- G. Descripción de las principales decisiones tomadas por órganos administrativos o judiciales, y cuestiones concretas a que se refieren esas decisiones.
- H. Bibliografía resumida en la que se citen fuentes de la legislación y las principales decisiones, así como publicaciones oficiales y textos o extractos de la legislación en la materia.

I. OBSERVACIONES DEL GOBIERNO DE ITALIA SOBRE SUS NORMAS
PARA LA PROTECCION DE LA COMPETENCIA
Y EL MERCADO, 10 DE OCTUBRE DE 1990

Introducción

El 10 de octubre de 1990 el Parlamento italiano promulgó la Ley Nº 287/90 por la que se establece la Autoridad para "garantizar la competencia y el mercado". Además de los Estados Unidos, donde la Ley Sherman fue

promulgada en 1890, todos los demás países industriales adoptaron leyes antimonopolísticas mucho antes que Italia: Francia en 1945 (Ordenanza 45-1483), Japón en 1947 (Ley sobre los monopolios privados y las prácticas comerciales restrictivas), el Reino Unido en 1948 (Ley sobre los monopolios y las prácticas restrictivas) y Alemania primero en 1923 y luego en 1946-1947. Por otra parte, a mediados del decenio de 1950 la Comunidad Europea promulgó normas legales que favorecen la competencia (véanse los artículos 65 a 67 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y los artículos 85 a 94 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea).

La demora en la adopción de leyes antitrust en Italia puede explicarse por diversas circunstancias. Entre 1950 y 1990 el Parlamento italiano debatió muchos proyectos de ley pero ninguno fue aprobado. Una de las razones es la existencia en Italia de un sector industrial estatal bastante amplio, que muchos piensan que contribuye a eliminar posibles posiciones monopolísticas. Además, el debate político en este país ha sido muy ideológico y no hubo opiniones compartidas respecto de una ley antitrust. En realidad a menudo, se consideró a las medidas antitrust como un medio para intervenir directamente en el mercado y no para proteger a las fuerzas competitivas. No obstante, en el decenio de 1980 se vivió en un nuevo clima, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. En particular, la aceleración del proceso de integración europea condujo a todos los Estados miembros a adoptar políticas favorables a la competencia y al funcionamiento ordenado del mercado, de conformidad con las políticas prevalecientes en el nivel de la CEE. En Italia se estableció en 1986 una Comisión patrocinada por el Gobierno para estudiar la posibilidad de adoptar leyes antitrust. La Comisión publicó un informe definitivo en abril de 1988 y en el verano de ese año se presentaron al Parlamento dos proyectos de ley antitrust. Después de un prolongado debate, el 10 de octubre de 1990 se aprobó la nueva ley antitrust italiana (Nº 287/90).

El presente informe contiene principalmente una descripción de la ley y un examen de sus características más importantes (véase el capítulo I). Como la Comisión sólo se estableció a fines de 1990, los casos presentados para que los examinara en los pocos meses (octubre de 1990 a marzo de 1991) que abarca este informe son muy pocos, pero se los expone y examina en el capítulo 2.

Capítulo I

Características de la ley Nº 287/90

1.1. Introducción

Como indica el artículo 1, esta ley fue promulgada en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución italiana con el fin de proteger y garantizar el derecho de iniciativa económica y la libertad de empresa y se refiere explícitamente a los principios de la legislación de la Comunidad Europea que rigen la competencia.

La referencia al artículo 41 de la Constitución italiana indica que el objetivo del legislador es proteger y garantizar la empresa privada, con la aclaración de que la legislación "no puede estar en conflicto con el bien público ni poner en peligro la seguridad, la libertad y la dignidad humana" (inciso 2) del artículo 41 de la Constitución).

La otra característica importante de la nueva legislación es su relación con el derecho de la Comunidad. En primer lugar, la ley italiana complementa la legislación de la Comunidad en relación con el ámbito de aplicación. Ese ámbito se define en el artículo 1, donde se dice que la ley se refiere a los acuerdos, el abuso de una posición dominante y las fusiones que no están regidos directamente por la legislación de la Comunidad (artículo 65 y 66 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, artículos 85 y 86 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, reglamento Nº 4064/89, otros reglamentos de la CEE y documentos de la Comunidad que tienen fuerza de ley). En otras palabras, la legislación italiana se limita a regir prácticas a las que no se refiere la legislación de la Comunidad y cuyos efectos se producen en el territorio italiano.

Tanto la legislación nacional sobre la competencia como la de la Comunidad tratan de los mismos casos: acuerdos, fusiones y abuso de una posición dominante.

Además, el apartado 4) del artículo 1 de la Ley es sumamente importante, pues allí se dice que las disposiciones del Título 1 (que se refiere a las prácticas anticompetitivas) deben interpretarse de conformidad con los principios del derecho de la Comunidad, enunciados no sólo en la legislación de la Comunidad, sino también en las sentencias del Tribunal de Justicia y en las decisiones de la Comisión de la CEE.

La inclusión en la legislación italiana de los principios de interpretación elaborados en la Comunidad presenta muchas ventajas. Basta pensar, por ejemplo, en la utilidad que tiene en relación con las nociones mismas de acuerdo, posición dominante y el abuso de esa posición.

Otro concepto fundamental de la Comunidad es la norma que asigna importancia fundamental al análisis del caso concreto, al examen de la estructura efectiva antes y después de que se produzca un cambio determinado y al examen de las alternativas disponibles.

Finalmente, el sistema de la Comunidad se refiere a la noción económica de empresa tratando de superar todo posible velo jurídico. Según el concepto de la CEE, puede considerarse que varias entidades jurídicas sin autonomía financiera ni para adoptar decisiones constituyen una sola empresa. Por consiguiente, según la legislación de la Comunidad puede considerarse a un grupo integrado de empresas como una sola empresa.

Sin embargo, hay que tener presente que cuando el sistema italiano recibe los principios de interpretación de la legislación de la comunidad esos mismos principios se refieren a dos medios diferentes y persiguen objetivos distintos. Por ejemplo, las disposiciones del Tratado de Roma relativas a la

competencia están destinadas a eliminar situaciones que podrían entorpecer el comercio entre los Estados miembros con el objetivo último de alcanzar la integración económica. La legislación nacional se aplica a un mercado nacional ya integrado.

Es de este modo que hay que interpretar el apartado 4 del artículo 1 de la Ley, y no meramente como una transposición general de la legislación de la Comunidad en la ley italiana; se trata más bien de recordar la necesidad de interpretar la Ley sobre la base del sistema europeo conjuntamente con el sistema italiano, coordinándolos e integrándolos.

En cuanto a la noción de grupo de empresas prevista en la ley italiana, la sentencia N° 1429, de 26 de febrero de 1990, del Tribunal Supremo de Casación, aporta una contribución importante. Según esa sentencia la noción económica que define al grupo como esencialmente una sola empresa tiene un equivalente jurídico en la noción del grupo como una sola empresa compleja, constituida por tantos empresarios como empresas pertenecientes al grupo. No obstante, esa sentencia todavía no es una parte integrante del sistema judicial italiano y la Autoridad, también debido a que la noción de control (de la que se trata en el apartado 3 del artículo 1) todavía no había sido totalmente aclarada, exige que se comuniquen todas las operaciones.

1.2. Disposiciones que rigen los acuerdos, el abuso de una posición dominante y las fusiones

El Título I, al referirse a los principios de la legislación de la comunidad, define a las prácticas anticompetitivas pertinentes como: acuerdos, abuso de una posición dominante y fusiones.

a) Acuerdos

En el artículo 2, adoptando la redacción del artículo 85 del Tratado de Roma, se define a los acuerdos y/o las prácticas concertadas entre empresas, así como a las decisiones por asociaciones de empresas y organizaciones similares. Todos los acuerdos que tengan por objeto o por efecto impedir, restringir o deformar la competencia en el mercado nacional, o en una parte sustancial del mismo, en medida apreciable, están prohibidos.

Después de la definición general, en el artículo 2 se enumeran los actos que pueden ser una consecuencia de los acuerdos prohibidos:

- la fijación, directa o indirecta, de precios de compra o de venta, o de cualesquiera otras condiciones contractuales;
- la limitación o el control de la producción, los mercados o el acceso a los mercados, las inversiones, el desarrollo técnico o el progreso tecnológico;
- la distribución de los mercados o de las fuentes de abastecimiento;

- la aplicación de condiciones distintas a transacciones equivalentes en las relaciones comerciales con otras partes contratantes por los mismos servicios, colocándolas así en una posición de desventaja competitiva injustificada;
- la supeditación de la conclusión de contratos a la aceptación por las otras partes contratantes de obligaciones suplementarias que, por su carácter o según los usos comerciales, no tienen relación con el objeto de esos contratos.

Sin embargo, esta lista se da sólo como ejemplo y no es exhaustiva.

En el caso de los acuerdos, no se impone la obligación o exigencia de comunicarlos, y todos los acuerdos prohibidos por la ley son automáticamente nulos y sin valor.

En la sección 4 figura una excepción a la prohibición de los acuerdos que limitan la competencia; en virtud de ella la Autoridad puede permitir acuerdos o categorías de acuerdos que según el artículo 2 deberían estar prohibidos porque impiden la libre competencia. Esa sección prevé la posibilidad de autorizar excepciones, pero sólo por un período limitado, en el caso de acuerdos que mejoran las condiciones de la oferta en el mercado (en función de un aumento de la producción, un mejoramiento de la calidad de la producción o la distribución o progresos técnicos o tecnológicos) conduciendo así a beneficios importantes para los consumidores..

Se otorga esa autorización cuando las partes interesadas la solicitan a la Autoridad, que debe pronunciarse dentro de los 120 días a partir de la fecha en que se ha presentado la solicitud, ejerciendo las facultades de investigar y examinar la solicitud previstas por la ley.

Las exenciones deben ser limitadas en el tiempo y no deben llegar a eliminar la competencia en una parte apreciable del mercado.

Además de los límites temporales de la validez de la autorización o exención, en el apartado 2 del artículo 4 se dispone que la autorización puede ser siempre retirada, una vez que la Autoridad ha hecho una notificación previa en ese sentido, cuando cualquiera de las condiciones que la hayan justificado haya dejado de existir o cuando la empresa de que se trate abuse de la autorización. En el caso de una autorización otorgada en relación con toda una categoría, los efectos de su retiro se limitarán, presumiblemente, a excluir aquellos acuerdos en relación con los cuales se ha producido concretamente el abuso o han dejado de existir las condiciones establecidas en la autorización general.

En cuanto a los acuerdos, que según la experiencia de la CEE y de los principales países industriales han ocasionado el mayor número de medidas de parte de las autoridades responsables de vigilar la competencia, la evaluación de los efectos económicos de la limitación de la competencia está confiada enteramente a la Autoridad. En otras palabras, la ley no asigna al gobierno la función de establecer previamente una política general respecto de los

acuerdos que limitan la competencia, a diferencia de la situación que existe en relación con las fusiones.

b) Abuso de una posición dominante

En el artículo 3 se prohíbe el abuso de una posición dominante en el territorio nacional o en una parte apreciable del mismo. Están prohibidas, en particular, las siguientes prácticas: la fijación directa o indirecta de precios de compra o de venta o de cualesquiera otras condiciones contractuales injustificablemente onerosas; la limitación o el control de la producción, los mercados o el acceso a los mercados, las inversiones, el desarrollo técnico o el progreso tecnológico en detrimento de los consumidores; la aplicación de condiciones objetivamente distintas a transacciones equivalentes en las relaciones comerciales con otras partes contratantes por los mismos servicios, colocándolas así en una posición de desventaja competitiva injustificada; la supeditación de la conclusión de los contratos a la aceptación por las otras partes contratantes de obligaciones suplementarias que, por su carácter o según los usos comerciales, no tienen relación con el objeto de esos contratos.

Esta lista, como la relativa a los acuerdos, se da simplemente a título de ejemplo. Hay casos similares a los enumerados en el artículo 2, excepto respecto de la distribución del mercado y las fuentes de abastecimiento, que sólo se aplican en el caso de los acuerdos.

Como el artículo 86 del tratado de la CEE, la Ley no define los conceptos de posición dominante o "abuso de una posición dominante". A este respecto, tanto en el ámbito nacional como en el de la Comunidad hay una considerable incertidumbre en la interpretación debido a la ausencia de criterios de referencia suficientemente claros y objetivos.

Sin embargo, hay que observar que lo que debe impedirse no es la existencia de una posición dominante sino el abuso de ella.

c) Adquisiciones y fusiones

Los artículos 5 a 7 se refieren a las fusiones. En primer lugar, el artículo 5 define a las operaciones de fusión, adoptando las características esenciales del artículo 3 del reglamento 4.064/89 de la CEE. Se producen en tres casos: cuando dos o más empresas se fusionan, cuando uno o más sujetos que tienen una posición de control en por lo menos una empresa o en más de una, adquieren directa o indirectamente el control de la totalidad o parte de una o más empresas, y finalmente, cuando dos o más empresas crean una empresa común constituyendo una nueva compañía.

Debe darse una notificación previa a la autoridad de las adquisiciones y fusiones siempre que la cifra de negocios nacional combinada de todas las empresas involucradas supere los 500.000 millones de liras, o cuando la cifra de negocios nacional total de la empresa que se adquirirá supere los 50.000 millones de liras (art. 16).

Los bancos, las instituciones financieras y las compañías de seguros tienen criterios específicos para calcular los umbrales más allá de los cuales la Autoridad debe ser notificada de las fusiones y adquisiciones.

No se adquiere el control de una empresa cuando un banco o una institución financiera adquiere acciones en esa empresa cuando se la constituye, o cuando se aumenta el capital social, siempre que lo haga para vender las acciones en el mercado, a condición de que durante el período en que está en posesión de las acciones, que no puede ser mayor de 24 meses en ningún caso, no ejerza los derechos de voto correspondientes a esas acciones.

Al ejercer un control previo sobre las fusiones sujetas a notificación previa, la Autoridad debe determinar si esas operaciones suponen la creación o el fortalecimiento de una posición dominante en el mercado nacional en una medida tal que elimine o reduzca permanente o apreciablemente la competencia. Para evaluar la situación, la Autoridad debe tener presentes varios elementos enunciados en la ley a título de ejemplos: la posibilidad de elegir los abastecedores y los clientes, la posición en el mercado de las empresas de que se trata, su acceso a las fuentes de abastecimiento y a los mercados, la estructura de los mercados, la situación competitiva de la industria nacional, las barreras contra empresas competidoras en el mercado y la tendencia de la oferta y la demanda de los productos o servicios de que se trata.

Después de realizar esa investigación, si la Autoridad está segura de que la operación limita efectivamente la competencia, puede prohibir la fusión o autorizarla a condición de que se adopten medidas concretas para impedir que se produzcan las consecuencias indeseables.

En algunos casos, la ley permite a la Autoridad autorizar las adquisiciones y fusiones prohibidas. Sin embargo, esa facultad está mucho más limitada en el caso de las fusiones que en el de los acuerdos. En el artículo 25 de la Ley se dispone que el Consejo de Ministros italiano (el Gabinete), a propuesta del Ministro de Industria, establecerá los criterios generales que aplicará la Autoridad para otorgar autorizaciones, levantando las prohibiciones previstas en el artículo 6 de la Ley, cuando intereses generales importantes de la economía nacional intervengan en el proceso de la integración europea, a condición de que no eliminen la competencia del mercado ni limiten la competencia de un modo que no esté estrictamente justificado por los intereses económicos generales mencionados.

Por consiguiente, la Autoridad sólo puede conceder excepciones a la prohibición de fusiones en virtud de el artículo 6 de conformidad con las directrices generales establecidas en el más alto nivel político. La Autoridad está obligada a evaluar los efectos de las fusiones en las operaciones del mercado, aunque la competencia no sea eliminada o limitada injustificadamente. La Autoridad debe también indicar las medidas que habrá que adoptar para restaurar la plena competencia en un plazo determinado. Estos criterios, que deben enunciarse de un modo general con anticipación, no han sido todavía establecidos por el Gobierno italiano.

1.3. El concepto de control

La definición del control de una empresa, indicada en el artículo 7, es más amplia que la que da el artículo 2.359 del Código Civil italiano, refiriéndose a las relaciones de influencia entre particulares (y no sólo entre empresas) que pueden suscitarse como resultado de circunstancias especiales de facto o de jure. Más concretamente, en el artículo 7 se dispone que el control queda demostrado no sólo en los casos previstos en el artículo 2.359 (al que se hace referencia en la Ley N° 127, de 9 de abril de 1991), sino también cuando "haya derechos, contratos u otras relaciones jurídicas que creen conjuntamente o por separado la posibilidad de ejercer una influencia decisiva en las actividades de una empresa, teniendo presentes todas las circunstancias de facto y de jure".

1.4. Empresas públicas y privadas: monopolios

Todas las disposiciones que rigen los acuerdos, el abuso de una posición dominante y las adquisiciones y fusiones se aplican a las empresas tanto privadas como públicas y a aquéllas en las que el Estado tiene una participación que le permite controlarlas (art. 8). En cambio, no se aplican a las empresas encargadas de administrar servicios de interés económico general y que operan en el mercado como un monopolio (reglamentado por el Estado), aunque sólo dentro de los límites estrictamente necesarios para alcanzar sus objetivos concretos.

Otra disposición importante figura en el artículo 9, donde se permite la producción de bienes y la prestación de servicios respecto de los cuales la ley prevé un monopolio institucional, siempre que sean para el uso de la propia empresa o para el uso de empresas matrices o filiales. No obstante, no se admite la producción para el uso interno cuando el monopolio esté justificado únicamente por razones de política pública, de policía, de defensa nacional y en el sector de las telecomunicaciones y esté regido por la Ley N° 223 del 6 de agosto de 1990.

1.5. La Autoridad como garante de la competencia y el mercado

Para impedir las actividades anticompetitivas mencionadas en el Título I o prevenir sus efectos la ley ha instituido una nueva Autoridad designada en el artículo 10 "Autoridad para garantizar la competencia y el mercado". La característica esencial de esta Autoridad es su independencia, claramente enunciada en el apartado 2 del artículo 10, donde se dispone que "la Autoridad procederá con plena autonomía e independencia en sus juicios y evaluaciones".

La Autoridad es un órgano colegiado compuesto de un Presidente y cuatro miembros designados por los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Los cinco miembros permanecen en sus cargos siete años y no pueden volver a ser nombrados y la condición fundamental para ser miembro es la independencia personal, reforzada por disposiciones estrictas que rigen la incompatibilidad con su puesto, y calificaciones profesionales específicas.

La independencia de la Autoridad se manifiesta también en la exigencia de que todas sus medidas se publiquen en un boletín especial (art. 26) y en la obligación de presentar un informe anual al Primer Ministro, que lo remite al Parlamento (art. 23). Esos dos requisitos están destinados a asegurar que la labor de la Autoridad esté sujeta al juicio del Gobierno, del Parlamento y de la opinión pública.

Las actividades de los servicios y departamentos de la Autoridad son supervisadas por un Secretario General designado por el Ministro de Industria a propuesta del Presidente de la Autoridad. La Autoridad tiene además su propio personal, que no puede ser superior a los límites establecidos de 150 personas.

La Autoridad es un órgano administrativo sin facultades jurisdiccionales. Tiene todas las características de lo que ha sido recientemente introducido en el sistema jurídico italiano como "una Autoridad administrativa independiente", similar a los organismos independientes de la tradición francesa y norteamericana.

Las decisiones de la autoridad están sometidas al control de los tribunales, como lo prescriben los artículos 24 y 113 de la Constitución italiana. En el artículo 33 de la Ley se dispone que la decisión de apelar contra cualquiera de las medidas administrativas de la Autoridad debe adoptarla el Tribunal Administrativo Regional del Lazio. Los juicios de anulación e indemnización iniciados por particulares y las peticiones para obtener la aplicación de procedimientos de emergencia caen dentro de la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones competente.

1.6. Facultades de la Autoridad en relación con los acuerdos, el abuso de una posición dominante y las fusiones

Las facultades de la Autoridad son distintas en los casos de los acuerdos y los de abusos de una posición dominante, respecto de los cuales la Ley prevé los mismos procedimientos (arts. 12 a 15), y en el de las fusiones, que están regidas por los artículos 16 a 19.

En relación con sus facultades de investigación, es necesaria una observación general preliminar: no puede iniciarse el examen de una manera general e indiscriminada, sino sólo en los casos en que hay indicios que sugieren que la Ley ha sido violada. Eso está previsto en los artículos 14 y 16 que se refieren, respectivamente, a "casos de presuntas violaciones de los artículos 2 y 3" y las fusiones que "deberán prohibirse en virtud del artículo 6". Esto está de acuerdo con el artículo 6 del reglamento 4.064/89 de la CEE que dispone que la investigación sólo se efectuará cuando haya serias dudas respecto de la compatibilidad de la fusión con el Mercado Común.

El procedimiento administrativo regido por esta Ley también permite la aplicación de la Ley 241/1990 donde se establecen disposiciones generales para el procedimiento administrativo. Por consiguiente esta última ley se aplica en todos los asuntos que no estén cubiertos por la Ley N° 267.

Los procedimientos investigativos a los que debe ajustarse la Autoridad en el ejercicio de sus facultades serán enunciados, de conformidad con el apartado 5 del artículo 10, en reglamentaciones que serán promulgadas por decreto presidencial para velar por que las decisiones y los argumentos sean conocidos públicamente y dar oportunidad a un debate entre las partes, del que se deberán conservar las minutas. Puesto que todavía no se han promulgado esas reglamentaciones, la Autoridad se atiene provisionalmente a las disposiciones de las Leyes Nos. 241 y 267 de 1990.

1.7. Límites de las facultades de la Autoridad

En el caso de las instituciones financieras y los bancos como en el de las empresas de radiodifusión y las editoriales, la facultad de hacer aplicar los artículos relativos a los acuerdos, el abuso de una presión dominante, las adquisiciones y las fusiones es ejercida por sus órganos de supervisión respectivos: el Banco de Italia y el garante de las industrias editorial y de la radiodifusión. Pero antes de adoptar cualquier medida relativa a la competencia deben consultar a la Autoridad. En este caso la norma es "el silencio equivale a un consentimiento": si la Autoridad no contesta en los 30 días posteriores a la fecha de la petición, el órgano de supervisión puede adoptar sus propias medidas.

En el apartado 5 del artículo 20 se establece un procedimiento diferente en el caso de las relaciones entre la Autoridad y el Banco de Italia, introduciendo la posibilidad de permitir una exención limitada de la prohibición mencionada en el artículo 2 en interés de la estabilidad del sistema monetario, teniendo presentes los criterios enunciados en el apartado 1 del artículo 4. En este caso el Banco de Italia puede conceder la autorización conjuntamente con la Autoridad, que debe decidir si el comportamiento es nocivo para la competencia o no.

En el caso de operaciones en las que intervienen compañías de seguros, la Autoridad es responsable de la aplicación de la ley después de haber escuchado la opinión del contralor de las compañías de seguro privadas (ISVAP).

En todos los casos la Autoridad puede notificar al Banco de Italia y al Garante toda situación en que hayan sido violados los artículos 2 y 3 (acuerdos y abuso de una posición dominante).

Hay que observar también que el control de las editoriales y las radiodifusoras está colocado en un plano especial, principalmente en relación con el artículo 21 de la Constitución italiana que establece la libertad de información. En este caso, el aspecto económico de la protección de la competencia, aunque puede estar presente, juega un papel distinto.

1.8. Facultades de la Autoridad para asesorar y realizar investigaciones

Además de sus facultades en el ámbito de la adopción de decisiones, que suponen una fase de investigación de los hechos y la posibilidad de imponer sanciones, la Autoridad ejerce también otras dos facultades importantes: la notificación y la formulación de propuestas y el asesoramiento. Ambas

facultades adquieren considerable importancia en la perspectiva más amplia de la protección de la competencia, que no sólo supone la regulación del comportamiento anticompetitivo de las empresas sino también la limitación de las deformaciones que derivan de limitaciones administrativas y legales y la determinación de todas las medidas que hay que adoptar para que el mercado pueda funcionar adecuadamente. A tal efecto, la Ley prevé oportunamente que la Autoridad no sólo ejercerá sus facultades de formular opiniones e investigar los hechos para pronunciarse acerca de casos particulares y concretos sino también en relación con problemas de carácter general, basándose en su conocimiento y su experiencia.

La facultad de notificar y proponer está prevista en el artículo 21, donde se dispone lo siguiente: "la Autoridad determinará los casos de importancia especial en que las disposiciones de la ley o las reglamentaciones o las disposiciones administrativas generales crean deformaciones de la competencia o del correcto funcionamiento del mercado que no se justifican a la luz del interés general".

Una vez identificados esos casos, la Autoridad notifica al Parlamento, al Primer Ministro, a los ministerios competentes y a las autoridades locales interesadas, según corresponda. Por otra parte, la Autoridad puede indicar las medidas que es necesario adoptar para eliminar o prevenir esas deformaciones y se la ha otorgado la importante facultad de publicar sus observaciones y sus propuestas.

Cabe observar además que si bien la Ley habla de "una opinión respecto de las medidas que es necesario adoptar" se trata sólo de la facultad de formular una propuesta, pues es la Autoridad la que toma la iniciativa y señala a la atención del organismo de que se trata la conveniencia de actuar en un sentido o en otro.

Por otro lado, la opinión forma parte de una fase distinta del procedimiento. En este caso, es el organismo competente el que toma la iniciativa solicitando a otro organismo que exprese su opinión.

Lo mismo cabe decir del artículo 24, donde se dispone que dentro de los 18 meses siguientes a su constitución la Autoridad deberá presentar un informe al Primer Ministro sobre las medidas que hay que adoptar para adoptar toda la legislación relativa a las licitaciones públicas, los concesionarios y las empresas de distribución comercial a los principios de la competencia. En otras palabras, la Autoridad debe formular propuestas directas para la ordenación correcta de estos sectores una vez que haya identificado las causas de las deformaciones de la competencia.

Las licitaciones públicas, la distribución comercial y las actividades de los concesionarios representan una parte muy grande de la producción nacional de Italia. Hay asimismo sectores en que la Comunidad ya ha tomado iniciativas importantes para ampliar la competencia dentro del Mercado Común. Es evidente que la función que el artículo 24 atribuye a la Autoridad es particularmente delicada e importante.

La facultad de acelerar está prevista en el artículo 22, que permite a la Autoridad expresar su opinión sobre las leyes o reglamentaciones y sobre problemas relativos a la competencia y el mercado siempre que lo estime apropiado o cuando así se lo soliciten los organismos públicos o departamentos del gobierno competentes. El Primer Ministro puede también pedir la opinión de la Autoridad en relación con leyes o reglamentaciones cuyo efecto directo sea:

- establecer restricciones cuantitativas del ejercicio de una actividad o del acceso a un mercado;
- establecer derechos exclusivos en determinadas esferas; e
- imponer prácticas generales para la fijación de precios o condiciones de venta.

Esas opiniones son facultativas y no entrañan una obligación. No obstante, la Autoridad puede intervenir siempre que lo estime apropiado. Pero también en este caso la Autoridad debe desempeñar un papel muy importante en la protección de la competencia.

1.9. Algunos problemas de interpretación relativos a la aplicación de esta ley

Las cuestiones más sensibles y complejas planteadas por la aplicación de la Ley Nº 267/90 tienen relación con la interpretación de las disposiciones que rigen el abuso de una posición dominante, las fusiones y los acuerdos.

La referencia que se hace en la Ley a categorías de casos muy generales y abstractas persigue probablemente el fin de evitar el riesgo de que disposiciones sobre la competencia excesivamente rígidas o detalladas se vuelvan rápidamente obsoletas en una esfera sumamente fluida y variable. No obstante, es necesario definir con claridad y coherencia suficientes un conjunto de criterios para identificar y evaluar situaciones que podrían conducir a la deformación de la competencia. Este es el razonamiento en que se apoya la referencia a los principios del sistema similar de la Comunidad (e implícitamente a la jurisprudencia comunitaria) que figura en el último apartado del artículo 1, relativo a la interpretación de las disposiciones del Título I de la Ley.

1.10. El poder en el mercado y el abuso de una posición dominante

El concepto de poder en el mercado es importante para la aplicación de las disposiciones que rigen el abuso de una posición dominante y el control de las fusiones. En su sentido más general, el poder en el mercado se refiere a la posibilidad de una empresa de desarrollar sus operaciones independientemente de otras empresas durante un período de tiempo suficientemente largo, por ejemplo, estableciendo precios más elevados que los competidores sin correr el riesgo de una disminución rápida y sustancial de su parte en el mercado.

Esa posición, a diferencia del monopolio y del cuasi monopolio, no excluye la existencia de cierta competencia, pero coloca a la empresa en una posición que le permite, si no decide, por lo menos influir considerablemente en la manera en que se practica la competencia, y en todo caso conducirse en muchos casos sin incurrir en ninguna responsabilidad (Hoffmann La Roche, caso 39)).

Esas definiciones dejan en pie muchas cuestiones relativas a la verificación de la existencia efectiva de una posición dominante en el mercado. Puesto que es imposible tener esas posiciones en un estado teórico de competencia perfecta, sólo se puede realizar la evaluación indirectamente, analizando datos, hechos y circunstancias que, considerados caso por caso, ofrecen indicios suficientes para poder establecer una presunción razonable y no arbitraria de "inmunidad" general de la empresa respecto de las limitaciones y los factores condicionantes que están típicamente asociados a una competencia efectiva y apreciable.

Ese es el enfoque adoptado por la Comisión de la CEE y el Tribunal de Justicia en la aplicación del derecho comunitario. Entre las pruebas que se tienen en cuenta ocupa el primer lugar la parte en el mercado. No obstante, como es bien sabido, la mera referencia a partes en el mercado es un criterio necesario para definir una posición dominante, pero no siempre proporciona una respuesta clara. En realidad, hay que definir al mercado de que se trata en función de todos los bienes y servicios, que varían considerablemente en cuanto a su calidad y su tipo, en relación con los cuales puede presumirse razonablemente que existe una competencia efectiva y mutua definida en función de la elasticidad cruzada de los precios y teniendo también presentes las características territoriales específicas.

Otros elementos son importantes para determinar la existencia de una posición dominante, además del tamaño de la parte en el mercado. El apartado 1) del artículo 6, donde se prohíben las fusiones que conducen a la constitución o el fortalecimiento de una posición dominante en el mercado nacional, pide a la Autoridad que tenga en cuenta la posibilidad de elegir los proveedores y los clientes (considerando evidentemente tanto los productos nacionales como los extranjeros) y el establecimiento de barreras estratégicas para impedir el acceso al mercado. Según todos esos criterios, de conformidad con el artículo 3, es posible determinar también la existencia de una posición dominante en relación con regiones más pequeñas dentro del territorio nacional, que son empero importantes en función de la dimensión (absoluta o relativa) del mercado local de los productos que se examinan, y de la presencia de condiciones competitivas especiales que sugieren que el mercado local es distinto de los mercados de las regiones adyacentes del territorio. Pero ni siquiera esos elementos indicados por la Ley son adecuados para determinar objetivamente los casos de abuso de una posición dominante. A ese respecto hay que recordar que la prohibición enunciada en el artículo 3 no se refiere a la posición dominante en sí misma sino al abuso del poder en el mercado por parte de una empresa dominante.

Este abuso consiste básicamente en comportamientos encaminados a aprovechar el poder de la empresa en el mercado para obtener beneficios económicos que no serían posibles de otra manera. Desde este punto de vista,

es ilícito no sólo abusar de una posición de fuerza sino también cometer actos que aunque son lícitos en sí mismos producen efectos restrictivos de la competencia precisamente debido a las limitaciones ya impuestas por el hecho de que una empresa tiene una posición dominante en el mercado. Este es el caso de una empresa que se niega a vender sus productos, que serían aceptables en condiciones normales, cuando su posición dominante es tal que el cliente potencial es de ese modo excluido del mercado, o tropieza con limitaciones del mercado o del acceso al mercado, en detrimento de los consumidores (véase *Zoja*, sentencia del 6.3.74, y *United Brands*, sentencia del 14.2.78).

1.11. Acuerdos que limitan la libertad de competencia

La Ley Nº 287/90 adopta una definición muy amplia del acuerdo. En el apartado 1 del artículo 2 se define como acuerdo a todo intento de las empresas de regular su comportamiento restringiendo voluntariamente su propia libertad de acción en el mercado, sea directamente o mediante asociaciones o consorcios establecidos entre ellas, independientemente de las características formales y el carácter jurídico de los compromisos que se ha contraído.

De modo general, la Ley parecería excluir los casos de acuerdos entre empresas que pertenecen al mismo grupo, debido a la noción de empresa expuesta reiteradamente por el Tribunal de Justicia de la CEE. Según esa noción, se considera al grupo como una sola unidad económica, dentro de la cual las empresas que lo constituyen, aunque son personas jurídicas distintas, carecen de una verdadera autonomía para decidir cuál será su comportamiento en el mercado, y básicamente se limitan a aplicar las instrucciones emitidas por la empresa matriz (véase *Beguelin*, sentencia de 25.11.71, *Continental Can and Centrofarm* sentencia del 31.10.74). Según el apartado 2 del artículo 2 están prohibidos los acuerdos "que tienen por objeto o por efecto impedir, limitar o deformar sustancialmente la competencia en el mercado nacional o en una parte sustancial del mismo". La referencia que se hace al objeto y al efecto del acuerdo sugiere que la prohibición puede aplicarse a cualquier acuerdo o cualquier cláusula de un acuerdo que limita la competencia independientemente de que las restricciones o los impedimentos constituyan el objeto o el efecto de ese acuerdo. De hecho, la prohibición puede basarse en uno u otro de esos elementos o en ambos.

No obstante, la necesidad de que exista una interferencia sustancial en la competencia limita el alcance de la prohibición, es decir, se requiere que las deformaciones sean sustanciales en relación con el mercado considerado en su conjunto, o sea, suficientes para influir apreciablemente en el funcionamiento del mercado.

Además, en su decisión de fecha 12 de septiembre de 1986, la Comisión de la CEE señaló que las disposiciones del artículo 85 del Tratado de Roma sólo se refieren a "acuerdos que tienen un efecto apreciable en las condiciones del mercado" y por consiguiente excluyen de la prohibición -suponiendo que tienen escasa importancia- a toda una serie de acuerdos identificados sobre la base de algunos parámetros mínimos relativos a la parte en el mercado de los productos que constituyen el objeto del acuerdo (no más del 5% del mercado) y

la dimensión de las empresas involucradas (una cifra de negocios no mayor que 200 millones de ECU).

No obstante, eso no significa que los acuerdos que superen esos límites serán necesariamente prohibidos. Como declaró expresamente la Comisión, en ciertas circunstancias acuerdos concluidos entre empresas que exceden esos límites sólo pueden afectar al comercio entre los Estados miembros o a la competencia en escaso grado y por consiguiente no están incluidos en el ámbito del apartado 1 del artículo 85.

Puede suponerse razonablemente que es principalmente en función de parámetros cualitativos que la prohibición dispuesta en el artículo 2 no es aplicable a casos en que la cooperación ante empresas destinadas a mejorar la eficiencia y la organización racional de sus actividades es el único objeto del acuerdo, que deja a las empresas de que se trata enteramente libres para actuar y competir en el mercado.

Las excepciones a la prohibición mencionada en el artículo 2 son aquellas relativas a acuerdos o categorías de acuerdos que, a diferencia de los acuerdos "sin interés", o a los acuerdos de cooperación exclusiva, deben considerarse prohibidos porque limitan la libertad de competencia. Esos casos pueden requerir en realidad la autorización específica de la Autoridad en los casos previstos en el artículo 4 de la Ley y regidos por él.

Capítulo 2

Actividades en los primeros meses posteriores a la entrada en vigor de la ley

2.1. Introducción

La exposición de las facultades ejercidas por la Autoridad durante los primeros meses de aplicación de la Ley pueden dividirse según los casos indicados por la Ley. Puede distinguirse entre la supervisión de fusiones (arts. 5 y 6), la supervisión de acuerdos (art. 2), la redacción y petición de opiniones (art. 20), los informes (art. 21) y el asesoramiento (art. 22).

En los primeros meses la Autoridad se ocupó de las principales tareas organizacionales relativas, entre otras cosas, a la búsqueda y el equipamiento de una sede apropiada para albergar al personal actual. La Autoridad comenzó sus actividades el 21 de noviembre de 1990 en locales proporcionados por el Ministerio de Industria y luego alquiló los locales actuales en Vía Calabria 48, Roma, adonde la Autoridad se mudó en febrero de 1991.

2.2. Adquisiciones y fusiones

Tan pronto como fue establecida, la Autoridad comenzó a examinar las comunicaciones que había recibido según lo prescrito por la ley. Al 31 de marzo de 1991 se habían presentado 74 comunicaciones relativas a fusiones. Algunas comunicaciones se referían a más de una operación.

Se examinó la documentación sobre las fusiones para verificar la relación de esas operaciones, si la tenían, con el derecho comunitario, para informar a la Comisión de la CEE (véase el apartado 2 del artículo 1). Sin embargo, ninguna de las fusiones tenía interés desde el punto de vista de la Comunidad. Se analizaron las comunicaciones relacionadas con el artículo 16 para verificar si las operaciones de fusión descritas en ellas limitaban la libertad de competencia, violando la prohibición impuesta en el artículo 6 de la Ley. Como no se han manifestado efectos que deformen la competencia en relación con ninguna de las fusiones comunicadas, la Autoridad todavía no ha estimado necesario emprender investigaciones y por consiguiente efectuó todas las comunicaciones previstas en el apartado 4 del artículo 16 dentro de los plazos indicados.

2.3. Características de las fusiones examinadas

Las comunicaciones examinadas comprendían un total de 83 fusiones, 47 de las cuales eran entre empresas pertenecientes al mismo grupo. El mayor número de las operaciones, con mucho, fueron intersectoriales: 67 de las 83. Esto es aún más evidente en el caso de las fusiones dentro del mismo grupo. Sólo en 8 de las 47 fusiones dentro del mismo grupo las empresas pertenecían a sectores diferentes.

El mayor número de las fusiones tuvieron lugar entre empresas pertenecientes a los sectores siguientes: bancos e intermediarios financieros, industria del equipo eléctrico y electrónico, industria química.

Uno de los primeros aspectos que cabe señalar respecto de los resultados es la gran diferencia en la distribución sectorial de las operaciones. Por un lado, los tres sectores mencionados precedentemente representaron un 50% de todas las fusiones, mientras que en 14 de los 26 sectores restantes no hubo fusiones.

Once de las 83 fusiones examinadas, 9 de las cuales fueron operaciones fuera de un mismo grupo, tuvieron lugar entre empresas con una cifra de negocios nacional total de menos de 500.000 millones de liras y la cifra de negocios nacional de la empresa resultante de la fusión no fue superior a 50.000 millones de liras.

A ese respecto pueden formularse varias observaciones en relación con el análisis de los distintos casos notificados. En primer lugar, aunque las dimensiones de las empresas que participan en la operación no sean superiores al umbral establecido por la ley, la cifra de negocios total en Italia del grupo al que pertenece la empresa matriz puede ser superior a esos umbrales. Además, muy a menudo se constituyen nuevas empresas con la finalidad específica de comprar divisiones de empresas o capital social y, por consiguiente, no es posible conocer su cifra de negocios.

2.4. Diseño del formulario para comunicar las fusiones

La Ley Nº 287/90 impuso la obligación de comunicar previamente a la Autoridad las fusiones pero no dice nada respecto de las formalidades.

En varios lugares la Ley dispone claramente que la comunicación debe efectuarse de una manera determinada y satisfacer condiciones específicas. El apartado 4 del artículo 16, por ejemplo, dice que la fusión debe ser "notificada de conformidad con el procedimiento indicado". Por otra parte, de las disposiciones del apartado 7 del artículo 16 puede inferirse que las comunicaciones enviadas a la Autoridad deben ser completas, correctas y verídicas.

En consecuencia la Autoridad convino en que toda la información esencial para el examen preliminar debe ser presentada de un modo sistemático y decidió diseñar un formulario especial de uso general que recomendará a las empresas que deseen notificar fusiones.

Las empresas mismas tienen interés en velar por que la información sea correcta y exacta, tanto para evitar demoras como para eliminar las incertidumbres lo antes posible, y también para evitar las sanciones en que incurrirían si no cumplieran con la obligación de presentar una comunicación previa (apartado 2 del artículo 19). Además, si las comunicaciones son más uniformes pueden adoptarse métodos más eficaces para verificarlas y las operaciones son más transparentes.

Al redactar el formulario para las comunicaciones, la Autoridad se basó en la experiencia de la Comunidad, tomando como modelo el formulario anexo al reglamento 4064/89. El formulario de la Comunidad fue modificado y considerablemente simplificado para tener en cuenta el alcance puramente interno de la aplicación de la Ley Nº 287, aunque pueden introducirse todas las modificaciones necesarias a medida que se adquiere más experiencia en su uso.

2.5. Acuerdos

Al 31 de marzo de 1991, sólo dos casos de acuerdos habían sido presentados a la Autoridad por partes no directamente involucradas. En uno de ellos, la Asociación de Comerciantes de Productos de Petróleo del Lazio había instado a sus miembros a que cobraran un precio determinado (según una lista de precios especial) aun por productos de petróleo suministrados en cantidades inferiores a los 2.000 litros.

La Autoridad, estimando que la Unión del Lazio podría estar violando el artículo 2 de la ley, decidió investigar el asunto. Para obtener más informaciones convocó a las partes interesadas, a otras asociaciones pertenecientes a la misma categoría y a operadores del sector con miras a evaluar el mercado de referencia.

La Unión de Comerciantes de Productos de Petróleo del Lazio reconoció que la distribución de la lista de precios era un comportamiento anticompetitivo y, en consecuencia, notificó a sus miembros la cancelación de esa lista y su anulación, aun como directriz.

2.6. Opiniones en virtud del artículo 20 y relaciones con otras instituciones

En cuanto a las relaciones con otros departamentos del Gobierno, la Autoridad ha mantenido frecuentes contactos con el ISVAP y el Banco de Italia, de conformidad con el artículo 20 de la Ley, en relación con las fusiones en que intervienen bancos y compañías de seguros.

En los primeros meses de actividad la Autoridad solicitó seis opiniones del ISVAP, en cumplimiento del apartado 4 del artículo 20, en relación con fusiones en que intervenían compañías de seguros. No se plantearon problemas particulares respecto de esas fusiones y el ISVAP tampoco señaló deformación alguna de la competencia.

Las relaciones con el Banco de Italia se refieren a las disposiciones complejas y delicadas del artículo 20. Durante este período la Autoridad formuló cuatro opiniones relativas a fusiones entre bancos. En ninguno de los cuatro casos la Autoridad halló pruebas de una deformación de la competencia y transmitió su opinión al Banco de Italia, que no estimó necesario disentir de la opinión favorable de la Autoridad.

La Autoridad también ha estado en contacto con otras instituciones, incluido el Ministerio de la Marina Mercante, en relación con el problema de las reglamentaciones portuarias, y con el CIP en relación con el caso de la Unión de Comerciantes de Productos de Petróleo del Lazio.

Para sus relaciones con la Comunidad, la Autoridad designó sus representantes ante la Comisión de la CEE. También designó representantes para asistir a las reuniones del Comité sobre los Acuerdos y el Comité sobre las Fusiones.

2.7. Notificación y actividades de asesoramiento

Los artículos 21 y 22 de la ley facultan a la Autoridad a notificar al Parlamento y al Gobierno las situaciones que deforman la competencia y a formular opiniones sobre leyes o reglamentaciones y sobre problemas relativos a la competencia y el mercado.

La Autoridad ha ejercido esas facultades en relación con la aplicación del artículo 9 de la Ley que otorga el derecho de producir cualesquiera bienes o servicios que sean objeto de un monopolio o una concesión pública siempre que sea para el propio uso de la empresa o para el uso de la empresa matriz y las empresas filiales.

Más concretamente, se presentaron tres solicitudes a la Autoridad de que se reconociera el derecho de producir para el propio uso en relación con las reglamentaciones portuarias, que crean típicamente un monopolio legal. Los casos de que se trataba tenían relación con la carga y descarga de buques, los servicios de remolcadores y la elaboración y conservación de pescado congelado, que es un monopolio de las empresas portuarias locales.

En todos esos casos se pidió a la Autoridad que garantizara el derecho de producción para el propio uso y adoptara medidas en relación con los precios que cobraban las empresas portuarias por esas operaciones.

La Autoridad señaló que el artículo 9 otorga a cualquier empresa que se propone producir para su propio uso un derecho subjetivo perfecto, a saber, una posición jurídica en la que el titular del derecho puede ejercerlo sin que sea necesaria ninguna intervención ulterior de parte del Estado. En consecuencia, el derecho a la producción para el propio uso es total y está inmediatamente protegido por la ley y garantizado por los tribunales en el caso de que se intente impedir su ejercicio.

A ese respecto, la Autoridad, que es un órgano administrativo, no debe, evidentemente, actuar como un tribunal. En particular, la Autoridad señaló que su intervención específica sólo puede producirse en el caso de una actividad ejecutada por un monopolio cuando haya un abuso de una posición dominante en violación de la Ley Nº 287/90.

Pero la Autoridad no tiene facultades para intervenir de una manera directa e inmediata en relación con las denuncias respecto de las tarifas impuestas por las empresas que disfrutaban de una situación de monopolio. La Autoridad lo ha confirmado en tres medidas reiterando que en los casos particulares examinados no podía adoptar la medida solicitada y que no era posible decir si existían o no las circunstancias de producción para el propio uso ni adoptar medida alguna respecto de los precios fijados por la empresa monopolista.

Habida cuenta de esto, la Autoridad decidió ejercer las facultades generales que le otorgan los artículos 21 y 22 de la Ley, a saber, el derecho a comunicar los casos de deformación de la competencia y a formular una opinión sobre leyes o reglamentaciones y sobre los problemas relativos a la competencia y el mercado.

Por consiguiente, notificó al Parlamento la necesidad de promulgar prontamente normas legislativas relativas a los puertos de conformidad tanto con el espíritu como con el alcance de la Ley Nº 287/90, garantizando la libertad de competencia y el funcionamiento correcto del mercado en los puertos y modificando las reglamentaciones que ya no fueran compatibles con la legislación italiana y de la Comunidad en general.

El Gobierno ya ha presentado al Parlamento un proyecto de ley (Nº 3313 ter, Cámara de Diputados) para eliminar el monopolio en los puertos derogando el artículo 110 del Código Marítimo a partir del 1º de enero de 1993. En relación con este proyecto de ley la Autoridad destacó la necesidad de velar por que se ponga fin a ese monopolio lo antes posible, aún antes de la fecha indicada.

En cuanto a la necesidad de reformar las leyes que rigen las actividades portuarias, la Autoridad ha destacado la necesidad de revisar los criterios para la fijación de precios con miras a liberalizar rápidamente el monopolio. No obstante, al hacerlo hay que tener presentes elementos fundamentales como

la dignidad de los trabajadores y la calidad y cantidad del trabajo ejecutado, y hay que tener en cuenta asimismo la necesidad de ofrecer incentivos para el empleo y aumentar la competitividad de los servicios portuarios nacionales.

II. OBSERVACIONES DEL GOBIERNO DE JAMAICA SOBRE LA LEY DE COMPETENCIA LEAL, 1993

A) La Ley está destinada a sentar normas legislativas que acompañen la política del Gobierno de reforma económica y modernización. Su pronta elaboración se basa en el rápido ritmo de los programas de liberalización, desregulación y privatización.

La Ley fue promulgada el 9 de marzo de 1993 pero no entrará en vigor hasta el 9 de septiembre de 1993 para permitir que continúe el programa de educación pública y para que las empresas puedan prepararse adecuadamente.

B) El objetivo de la Ley de competencia leal es asegurar que todas las empresas legítimas tengan la oportunidad de participar en lo que se percibe como una economía en crecimiento. Contiene también disposiciones para proteger al consumidor contra una variedad de prácticas desleales.

El Gobierno ha reducido considerablemente su intervención en la economía para permitir el libre juego de las fuerzas competitivas, pero ahora debe actuar como una referencia para velar por que todos se ajusten a las mismas normas. Tanto los empresarios como los consumidores se han pronunciado por un mercado en que las empresas puedan desarrollar sus actividades de modo leal y equitativo y donde todos puedan participar de conformidad con normas prescritas y transparentes.

C) La Ley se ocupa de problemas de comportamiento, y no de problemas estructurales, del sistema de mercado libre. Prohibirá estrictamente todas las formas de fijación de precios y fijación de precios de reventa. Anulará todas las disposiciones que figuren en acuerdos y tengan el efecto de menoscabar la competencia. Impedirá el abuso de una posición dominante en el mercado y la limitación del mercado. Pondrá coto a los acuerdos de exclusividad y a la manipulación de las licitaciones y las licitaciones colusorias.

En relación con los consumidores, la Ley de competencia leal controlará la publicidad engañosa, las ventas vinculadas, las ventas con descuento, las ventas a precios superiores a los anunciados y el desdoblamiento de precios.

D) La Ley no se aplicará sólo a quienes se ocupan de la producción de bienes sino también a quienes se ocupan de la prestación de servicios. Además, se aplicará igualmente al Gobierno y al sector privado. Se aplicará a las transacciones que afecten al mercado jamaicano.

La Ley reconoce ciertas excepciones. Por ejemplo, en la sección 3 se exceptúa a los sindicatos en sus acuerdos para las negociaciones colectivas, a las personas o empresas que gozan de derechos en virtud de derechos de autor,

patentes o marcas comerciales y a todos los acuerdos que haya autorizado la Comisión de Comercio Leal.

E) La Ley será administrada por una Comisión de Comercio Leal que tendrá muy amplias facultades para investigar. Podrá entrar en todo local comercial y confiscar los documentos pertinentes y podrá convocar ante ella a personas y tomarles juramento. También podrá prescribir las medidas correctivas que estime apropiadas en relación con todo abuso de una posición dominante en el mercado y toda otra violación de la ley. La Corte Suprema puede hacer aplicar sus disposiciones mediante sanciones pecuniarias y de otro tipo. La Ley prevé una multa máxima de 5 millones de dólares jamaicanos por cada violación que cometa una empresa y de 1 millón de dólares jamaicanos por cada violación que cometa un particular. La Ley concede también a los particulares el derecho privado de acción judicial para denunciar violaciones de la Ley directamente al Tribunal Supremo.

III. OBSERVACIONES DEL GOBIERNO DE VENEZUELA SOBRE LA "LEY PARA PROMOVER Y PROTEGER EL EJERCICIO DE LA LIBRE COMPETENCIA", DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1991

A. Descripción de los motivos de la promulgación de la legislación

La Ley para promover y proteger el Ejercicio de la libre competencia del 30 de diciembre de 1991 fue dictada con motivo de la restitución de la garantía económica establecida en el artículo 96 de la Constitución. La garantía de la libertad económica había permanecido restringida por lo menos desde 1961 y su restitución hacía surgir la necesidad de poner en vigencia una serie de leyes, entre ellas la mencionada. Por otra parte, la eliminación de una serie de controles y restricciones a la actividad económica, entre ellas la mayoría de los controles de precios, hacían conveniente la puesta en vigor de un instrumento que sancionara "las maniobras abusivas encaminadas a obstruir o restringir la libertad económica".

B. Descripción de los objetivos de la legislación y de la evolución que han tenido desde la promulgación de la primera legislación

El objeto fundamental de la Ley es la regulación del ejercicio de la libertad económica a través de la protección de la libre competencia. La Ley "busca promover y proteger el ejercicio de la libre competencia y la eficiencia en beneficio de los productores y consumidores y prohibir las conductas y prácticas monopólicas y oligopólicas y demás medios que puedan impedir, restringir, falsear o limitar el goce de la libertad económica".

C. Descripción de las prácticas, actos o comportamientos sujetos a control, indicando para cada uno de ellos:

- a) El tipo de control, por ejemplo: prohibición absoluta, prohibición en principio, o examen caso por caso; y

- b) El grado de control a que están sometidas las prácticas, actos o comportamientos especificados en los párrafos 3 y 4 de la sección del Conjunto de principios y normas, así como cualesquiera otras prácticas, actos o comportamientos que puedan ser objeto de control, en particular los relacionados expresamente con la defensa de los consumidores, por ejemplo la publicidad engañosa.

De conformidad con el artículo 7º del Reglamento N° 1 de la Ley para promover y proteger el ejercicio de la libre competencia son prácticas, actos o comportamientos sujetos a prohibición absoluta los siguientes:

- a) Los acuerdos, decisiones, recomendaciones colectivas o prácticas concertadas entre competidores para:
- i) fijar precios o condiciones de comercialización;
 - ii) limitar la producción mediante la fijación de niveles o cuotas;
 - iii) boicotear u obstaculizar el acceso al mercado, mediante la incitación a terceros sujetos de la Ley a no aceptar la entrega de bienes o la prestación de servicios, a impedir su adquisición o prestación, a no vender materias primas o insumos o prestar servicios a otros;
 - iv) participar en licitaciones;
 - v) repartir los mercados, áreas territoriales, sectores de suministro o fuentes de aprovisionamiento.
- b) Las conductas o prácticas unilaterales que constituyan un abuso de posición de dominio en el mercado relevante.

De conformidad con el artículo 8º del mencionado Reglamento, son prácticas prohibidas sujetas a autorización aquellas que aporten ventajas a los consumidores o usuarios de los bienes o servicios objeto de las mismas, que contribuyan a incrementar la eficiencia económica de las personas participantes en ellas, y cumplan las condiciones siguientes:

- 1) contribuyan a mejorar la producción, comercialización y distribución de bienes y la prestación de servicios o a promover el progreso técnico o económico;
- 2) aporten ventajas para los consumidores o usuarios;

Estas prácticas o conductas están sujetas a autorización previa de la Superintendencia para promover y proteger la libre competencia, así como al control de su ejecución. Dicha autorización sólo contendrá lo indispensable para lograr el objeto que se persigue. Ejemplos de dichas prácticas, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento N°, son las siguientes:

- a) La aplicación uniforme de normas y tipos relativos a condiciones generales comerciales, así como de suministro y pago.
- b) La investigación y desarrollo conjunto de mejoras técnicas o tecnológicas.
- c) La especialización a fin de racionalizar, planificar y fomentar la producción y los acuerdos necesarios para su realización o ejecución.
- d) La exportación de bienes o servicios.
- e) El compromiso de suministrar o comprar en exclusiva determinados productos.
- f) La imposición o establecimiento de limitaciones en relación con la adquisición o utilización de derechos de propiedad industrial e intelectual, incluidos los conocimientos técnicos.
- g) El otorgamiento de franquicias.

La publicidad engañosa y algunas otras prácticas de competencia desleal están prohibidas por la Ley.

D. Descripción del ámbito de aplicación de la legislación, indicando:

- a) Si es aplicable a todas las transacciones de bienes y servicios y, si no lo es, qué transacciones están excluidas;

La Ley se aplica a todas las transacciones de bienes y servicios. No se establecen excepciones basadas en sectores específicos de la economía, pero sí se establece, en la Resolución N° 0005-93 del 18 de junio de 1993 de la Superintendencia, que las prácticas concertadas entre competidores no afectan el comportamiento del mercado relevante en los siguientes casos:

- a) Cuando no excedan el quince por ciento (15%) del volumen total de negocios realizados con productos idénticos o considerados similares por el usuario, en base a sus propiedades, precio o uso; y
- b) las empresas participantes tengan un volumen de operaciones anuales no mayor a 30 millones de bolívares cada una.
- b) Si se aplica a todas las prácticas, actos o comportamientos que tienen efectos en el país, con independencia de dónde se realicen;

La Ley se aplica a todas las prácticas, actos o comportamientos que tienen efectos en el país, independientemente de dónde se celebren.

- c) Si depende de la existencia de un acuerdo o de que éste se ejecute;

La sola existencia de un acuerdo restrictivo de la competencia hace aplicable la legislación de la competencia, independientemente de su ejecución.

- E. Descripción del órgano o los órganos (administrativos o judiciales) encargados de la aplicación de la legislación, con indicación de las posibles disposiciones sobre notificación e inscripción, y facultades principales de ese órgano u órganos

El órgano administrativo encargado de la aplicación de la legislación es la Superintendencia para la promoción y protección de la libre competencia. De conformidad con el artículo 29 de la Ley, ella tiene, dentro de sus funciones, las siguientes:

- a) resolver las materias que le atribuye la Ley;
- b) realizar las investigaciones necesarias para verificar la existencia de prácticas restrictivas de la competencia e instruir los expedientes relativos a dichas prácticas;
- c) determinar la existencia o no de prácticas o conductas prohibidas, tomar las medidas para que cesen e imponer las sanciones previstas en la Ley;
- d) dictar las medidas preventivas para evitar los efectos perjudiciales de las prácticas prohibidas;
- e) otorgar las autorizaciones correspondientes en aquellos casos de excepción;
- f) proponer al Ejecutivo Nacional las reglamentaciones que sean necesarias para la aplicación de la Ley;
- g) emitir dictamen sobre los asuntos de su competencia cuando así lo requieran las autoridades judiciales o administrativas.

El órgano judicial competente en esta materia es la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo.

- F. Descripción de cualquier legislación paralela o suplementaria, en particular tratados o acuerdos con otros países en los que se establece algún tipo de cooperación o procedimiento para solucionar controversias en la esfera de las prácticas comerciales restrictivas

La legislación básica que rige a esta materia está conformada por la Ley para promover y proteger el ejercicio de la libre competencia y su reglamento N° 1. También rige en Venezuela la Decisión N° 285 del Acuerdo de Cartagena, cuyo ámbito de aplicación está definido en su artículo 2°.

G. Descripción de las principales decisiones tomadas por órganos administrativos o judiciales y cuestiones concretas a que se refieren esas decisiones

El 2 de diciembre de 1992 la Superintendencia dictó decisión en el caso de la FEDERACION FARMACEUTICA DE VENEZUELA. Esta decisión se refiere a un caso de "boicot".

El pasado 17 de mayo la Superintendencia tomó la decisión de imponer una multa en el caso de las empresas PREMEZCLADO Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S. A. (PRE-MEX), PREMEZCLADOS TUCON, C.A., MEZCLADORA MIXTO-LISTO CONSOLIDADA, C.A., VENMAR, C.A. (VENMARCA) y PREMEZCLADOS AVILA, C.A. Esta decisión se refiere básicamente a la existencia de un acuerdo de precios entre las citadas empresas.

La Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo no ha dictado ninguna decisión judicial sobre esta materia.

H. Bibliografía resumida en la que se citen fuentes de la legislación y las principales decisiones, así como publicaciones oficiales y textos o extractos de la legislación en la materia

Ninguna.

ANNEXES

Annex I

ITALY

(Original: ENGLISH and FRENCH)

Rules for the Protection of Competition
and the Market (*)

TITLE I

REGULATIONS ON CARTELS,
ABUSE OF DOMINANT POSITION AND CONCENTRATIONS

ARTICLE 1

Scope and relationship to Community rules

E/F seal

idem ref. 7 et 9

→ 1. The provisions of the present Law implementing Article 41 of the Constitution protecting and guaranteeing the right of economic initiative shall apply to cartels, to abuses of a dominant position and to concentrations which do not fall within the scope of Articles 65 and/or 66 of the Treaty establishing the European Coal and Steel Community, Articles 85 and/or 86 of the Treaty establishing the European Economic Community (EEC), EEC Regulations or Community acts having an equivalent regulatory effect.

→ 2. Where the Authority safeguarding competition and the market as referred to in Article 10, hereinafter referred to as the Authority, considers that a case submitted for examination by it does not fall within the scope of the present Law pursuant to paragraph 1 (it) shall inform the Commission of the European Communities of this and forward to it any information at its disposal.

3. Where cases are already the subject of proceedings by the Commission of the European Communities in pursuance of the standards referred to in paragraph 1, the Authority shall suspend its examination with the exception of any aspects which fall exclusively within national competence.

4. The rules contained in the present Title shall be interpreted on the basis of the principles of the European Communities' rules concerning the regulation of competition.

ARTICLE 2

Cartels restricting freedom of competition

1. The following shall be regarded as cartels: agreements and/or practices negotiated between undertakings and resolutions, even if adopted pursuant to statutory or regula-

* Law of 10 October 1990 n. 287 (*Gazzetta Ufficiale* n. 240, 13 Ottobre 1990). Translation by the Department of Trade and Industry Translation Service, United Kingdom.

Rules for the Protection of Competition and the Market

tory provisions, by consortiums, associations of undertakings and other similar bodies.

2. The following shall be prohibited: cartels between undertakings which have the aim or effect of preventing, restricting or appreciably distorting the play of competition within the national market or within a large part of it and, in particular, those which involve:

- a) Directly or indirectly fixing purchase or selling prices or other contractual conditions;
- b) Preventing or restricting production, outlets, access to the market, investment, technical development or technological progress;
- c) Dividing up markets or sources of supply;
- d) Applying objectively unequal conditions to other contractors in commercial relationships providing equivalent services, thereby possibly subjecting them to unjustifiable competitive disadvantages;
- e) Making the conclusion of contracts subject to the acceptance by the parties of additional services which by their nature or according to commercial practice are not related to the object of such contracts.

3. Prohibited cartels shall be null and void.

ARTICLE 3

Abuse of dominant position

1. The abuse of a dominant position within the national market or within a large part of it by one or more than one undertaking shall be prohibited and it shall also be prohibited to:

- a) Directly or indirectly impose purchase or selling prices or other unfair contractual conditions;
- b) Prevent or restrict production, outlets or access to the market, technical development or technological progress, to the detriment of consumers;
- c) Apply to commercial partners objectively different conditions for equivalent services, thereby subjecting them to an unjustifiable competitive disadvantage;
- d) Make the conclusion of contracts subject to the acceptance by the parties of additional conditions which by their nature or according to commercial practice are not related to the object of such contracts.

ARTICLE 4

Derogation from ban on cartels restricting freedom of competition

1. The Authority may, by means of a provision which it may make, authorize, even for a limited period, cartels or categories of cartels prohibited under the terms of Article 2 which may result in improvements in the supply conditions on the market, the effects of which are such that they entail a sizeable advantage for consumers and which are defined taking account also of the need to guarantee undertakings the necessary competitiveness at international level and which are linked in particular to an increase in production or to a qualitative improvement in production itself or in distribution or, further, to technical and technological progress. The authorization cannot anyhow permit restrictions not strictly necessary to the achievement of the aims referred to and cannot permit suppression of competition in a substantial part of the market.

2. The Authority may, after giving notice, revoke the measure authorizing derogation as referred to in paragraph 1 in cases where the person concerned abuses the

Rules for the Protection of Competition and the Market

authorization or where certain conditions on which the authorization was based no longer obtain.

3. Applications for authorization shall be submitted to the Authority, which shall avail itself of the powers of examination referred to in Article 14 and shall act within a period of 120 days from submission of such application.

ARTICLE 5
Concentrations

1. A concentration shall occur where:
 - a) Two or more undertakings merge;
 - b) One or more persons controlling at least one undertaking, or one or more undertakings, directly or indirectly, acquire, either by purchasing shares or by the purchase of part of the assets or by contract or by any other means, control of all or part of one or more undertakings;
 - c) Two or more undertakings, by setting up a new company, create a joint venture.
2. Control of an undertaking shall not be transferred where, on the creation of an undertaking or on an increase of its capital, a bank or a financial institution purchases holdings in that undertaking in order to resell them on the market, provided it does not exercise the voting rights conferred by the holdings during the period when it owns such holdings which in any case shall not exceed 24 months.
3. Operations which have as their main object or effect the coordination of the actions of independent undertakings shall not be regarded as concentrations.

ARTICLE 6
Ban on concentrations restricting freedom of competition

1. In the case of concentrations subject to notification pursuant to Article 16, the Authority shall assess whether they involve the establishment or reinforcement of a dominant position on the national market which could eliminate competition or result in an appreciable and lasting reduction in competition. This situation must be assessed bearing in mind the alternatives available to suppliers and users, the position of the undertakings concerned on the market, their access to supplies or markets, the market structures, the competitive position of the national industry, barriers to the entry of competing undertakings and the trends of demand and supply for the products or services in question.
2. Where, in the context of the examination referred to in Article 16 paragraph 4, the Authority has ascertained that the operation entails the consequences referred to in paragraph 1, it shall ban the concentration or it shall authorize it and lay down the necessary measures to prevent such consequences.

ARTICLE 7
Control

1. Under the terms of the present Article, control shall be gained in cases as laid down in Article 2359 of the Civil Code and furthermore where there are rights, contracts or other legal relationships which, individually or jointly, and taking account of the circumstances *de facto* and *de jure*, confer the possibility of exercising a decisive influence over the activities of an undertaking, including:

Rules for the Protection of Competition and the Market

- a) Rights of property or of tenure over all or part of an undertaking's assets;
- b) Rights, contracts or other legal relationships which confer a decisive influence over the composition, resolutions or decisions of the organs of an undertaking.

2. Control shall be acquired by the person or by the undertaking or by the group of persons or undertakings:

- a) Who own the above-mentioned rights or benefit from the above-mentioned contracts or are the subjects of the other above-mentioned legal relationships;
- b) Who, without holding such rights or benefits and not being subject of such legal relationship, are empowered to exercise the ensuing rights.

ARTICLE 8

Public undertakings in legal monopoly situations

1. The provisions referred to in the preceding Articles shall apply to both private and public undertakings and to those in which the state is the majority shareholder.
2. The provisions referred to in the preceding Articles shall not apply to undertakings which, in accordance with legislative provisions, provide services of general economic interest or which operate on the market on a monopoly basis, on matters which relate strictly to the performance of the specific tasks with which they have been charged.

ARTICLE 9

Own-production

1. The legal reservation in favour of the state or of a public body holding a monopoly position on a market and the legal reservation for an undertaking charged with the provision of goods and services to the public against remuneration shall not imply a ban on third parties producing such goods or services for their own use and for use by the controlling company and the controlled company.
2. Own-production shall not be authorized in cases where, on the basis of the provisions containing the reservation, it is established that the latter has been made for reasons of public order, public security and national defence and, subject to a concession, for the telecommunications sector.

TITLE II

ESTABLISHMENT AND FUNCTIONS OF THE AUTHORITY
SAFEGUARDING COMPETITION AND THE MARKET

CHAPTER I

ESTABLISHMENT OF THE AUTHORITY

ARTICLE 10

Authority safeguarding competition and the market

1. The Authority safeguarding competition and the market shall be established, and named the Authority, for the purposes of the present Law. The Authority's head office shall be in Rome.

Rules for the Protection of Competition and the Market

2. The Authority shall act with full autonomy and independence of judgment and assessment; it shall be a collegial body consisting of the Chairman and four members proposed and appointed jointly by the Presidents of the Chamber of Deputies and the Senate of the Republic. The Chairman shall be chosen from among persons known for their independence, who have held high institutional offices with wide-ranging responsibilities. The four members shall be chosen from among persons known for their independence, who will be selected from among judges from the Council of State, the State Audit Court and the Court of Cassation, ordinary university professors of economic or legal disciplines and persons with an economic background exhibiting a high level of professional experience.

3. Members of the Authority shall be appointed for a non-renewable period of seven years. They may not, under pain of losing their position, exercise any professional or consultancy activities. Nor may they be directors or employees of public or private bodies or perform other public duties of whatever. Civil servants shall be made available for the full period of the mandate.

4. The Authority shall be entitled to correspond with all public authorities and with other bodies under public law and to ask them both for data and information and for co-operation in the performance of its duties. In its role as the competent national authority safeguarding competition and the market, the Authority shall maintain the relationships laid down by Community rules on this subject with the institutions of the European Communities.

5. Within a period of ninety days from the entry into force of the present Law, examination procedures shall be set up by decree of the President of the Republic, on a proposal from the Minister of Industry, Commerce and Crafts, after consultation with the Treasury Minister, following a decision of the Council of Ministers, guaranteeing the persons concerned full knowledge of the documents relating the adversarial procedure and the proceedings.

6. The Authority shall lay down the rules concerning its organization and its operation, rules on the legal and economic position of the staff and their career path and rules intended to govern the control of expenditure within the limits laid down in the present Law, including those derogating from the provisions on the general national accounting system.

7. The Authority shall undertake the autonomous management of expenditure to cover its operations within the limit of the credits allocated for this purpose in the national budget and entered in a single chapter of the provisional statement of expenditure of the Ministry of Industry, Commerce and Crafts. Financial management shall be based on the provisional budget approved by the Authority before 31 December of the year preceding that to which the budget refers. The content and structure of the provisional budget, which must in any case contain the expenditure which is possible within the limits of the forecast revenue, shall be drawn up on the basis of the rules referred to in paragraph 6, which shall also govern the detailed rules of procedure for any amendments. The financial management report approved before 30 April of the following year shall be submitted for auditing by the Court of Auditors. The provisional budget and the financial management report shall be published in the *Gazzetta Ufficiale* of the Italian Republic.

8. The payments made to the President and Members of the Authority shall be determined by decree of the President of the Council of Ministers, on a proposal

Rules for the Protection of Competition and the Market

from the Minister of Industry, Commerce and Crafts, in co-operation with the Treasury Minister.

ARTICLE 11

Staff of the Authority

1. By decree of the President of the Council of Ministers, a specific role shall be created for the paid staff of the Authority. The number of posts in the organizational structure may not exceed 150. Staff recruitment shall be carried out by public competition, with the exception of those categories for which recruitment provisions are laid down under Article 16 of Law No. 56 of 28 February 1987.

2. The legal and economic position of staff and their career path shall be established according to the criteria laid down in the collective employment contract in force for the Bank of Italy, taking account of the specific functional and organizational requirements of the Authority.

3. Staff employed by the Authority shall be prohibited from exercising any other employment or other duties and from exercising professional, commercial or industrial activities.

4. The Authority may recruit up to 50 officials on fixed-term contracts subject to a legal regime under private law. Furthermore, the Authority may, if appropriate, call in expert consultants on specific subjects and problems.

5. The Secretary General shall be responsible to the Chairman for the functioning of the Authority's services and offices. He shall be appointed by the Minister of Industry, Commerce and Crafts, on a proposal from the Chairman of the Authority.

CHAPTER II

THE AUTHORITY'S POWERS CONCERNING CARTELS RESTRICTING FREEDOM OF COMPETITION AND ABUSE OF DOMINANT POSITION

ARTICLE 12

Powers of examination

1. After assessing the documents in its possession and those brought to its notice by the public authorities or by any other interested party, including bodies representing consumers, the Authority shall institute an examination to determine whether the prohibitions laid down in Articles 2 and 3 are being infringed.

2. The Authority may moreover, *ex officio* or at the request of the Minister of Industry, Commerce and Crafts or the Minister of State Participations, institute investigatory proceedings of a general nature in the economic sectors in which the development of trade, price movements or other circumstances indicate that the play of competition may be impeded, restricted or distorted.

ARTICLE 13

Notification of cartels

1. Undertakings may notify the Authority of cartels which have been set up. If within a period of 120 days from notification the Authority does not initiate the examination referred to in Article 14, it may no longer initiate such an examination, except in cases where the information notified is incomplete or untrue.

Rules for the Protection of Competition and the Market

ARTICLE 14
Examination

1. In the case of an alleged infringement of Articles 2 or 3, the Authority shall notify the undertakings and bodies concerned that an examination is being initiated. The owners or legal representatives of such undertakings or bodies shall be entitled to a hearing in person or through a special attorney within a period fixed at the time of notification and they shall be permitted to submit conclusions and opinions at any stage in the examination and be entitled to a further hearing before the closure of the examination.

2. The Authority may, at any stage of the examination, ask undertakings, bodies and persons in possession of information to supply it and to submit documents which may be of use for the purposes of the examination; it may decide to undertake inspections in order to examine the undertaking's documents and to produce copies of such documents and additionally avail itself of the cooperation of other government bodies. It may decide to have expert reports and economic and statistical analyses produced and to consult experts about any factor which is relevant to the purposes of the examination.

3. Any information, news or data relating to the undertakings which are subject to examination by the Authority shall be subject to official secrecy, even in respect of public authorities.

4. In exercising their functions, officials of the Authority shall be considered to be public officials. They shall be subject to official secrecy.

5. On a decision by the Authority, the persons who are requested to provide the documents referred to in paragraph 2 shall be liable to an administrative fine of up to ITL 50 million if, without good reason, they refuse or fail to supply the information or to submit the documents, or to an administrative fine of up to ITL 100 million if they submit untruthful information or documents. The penalties provided for by the rules in force shall also apply.

ARTICLE 15
Service of notice and penalties

1. If following the examination referred to in Article 14 the Authority ascertains that there have been infringements of Articles 2 or 3, it shall set a time limit on the undertakings and bodies concerned to eliminate the infringements. In the most serious cases it may decide, taking account of the gravity and the duration of the infringement, to further impose an administrative fine of at least one per cent and not exceeding ten per cent of the turnover of each undertaking or body achieved in the course of the last financial year completed before notice was served and relating to the products which form the object of the cartel or of the abuse of a dominant position; time limits shall be laid down for the undertaking to pay the penalty.

2. In the case of non-compliance with the notice referred to in paragraph 1, the Authority shall impose an administrative fine of up to ten per cent of the turnover or, in cases where the penalty referred to in paragraph 1 has already been imposed, a fine of a minimum sum which is no less than double the penalty already imposed with a ceiling of ten per cent of the turnover as defined in paragraph 1; it shall also set a time limit for the payment of the fine. In cases of repeated non-compliance, the Authority may decide to suspend the activities of the undertaking for up to 30 days.

Rules for the Protection of Competition and the Market

CHAPTER III

THE AUTHORITY'S POWERS TO BAN CONCENTRATIONS

ARTICLE 16

Notification of concentrations

1. The concentrations referred to in Article 5 must be notified in advance to the Authority if the aggregate turnover achieved nationally by all the undertakings concerned exceeds ITL 500 billion or if the total turnover achieved nationally by the undertaking which is to be acquired is higher than ITL 50 billion. These figures shall be raised each year by a sum equivalent to the rise in the GDP price deflator index.

2. In the case of banks and financial institutions the turnover used shall be equal to the value of one-tenth of the total assets, with the exclusion of suspense accounts and, in the case of insurance companies, to the value of premiums received.

3. Within a period of five days from the notification of a concentration, the Authority must inform the President of the Council of Ministers and the Minister of Industry, Commerce and Crafts.

4. If the Authority considers that a concentration may be subject to prohibition under the terms of Article 6, it shall initiate the examination immediately, within a period not exceeding 30 days from the date of receipt of the notification or from the time at which the concentration was made known to it, in compliance with the rules contained in Article 14. In the case of a concentration which is notified in accordance with the rules, where it considers that an examination ought not to be initiated, the Authority shall immediately inform the undertakings concerned and the Minister of Industry, Commerce and Crafts of its conclusions on this matter, within a period of 30 days from receipt of the notification.

5. Any takeover bid which may result in a concentration subject to notification as laid down in paragraph 1 of the present Article must be notified to the Authority at the same time as it is notified to the Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

6. In the case of a takeover bid notified to the Authority in pursuance of paragraph 5, the latter must notify the initiation of the examination within a period of 15 days from receipt of the notification and immediately inform the Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

7. The Authority may initiate the examination after the time limits provided for in the present Article have passed when the information supplied by the undertakings in the notification appears to be seriously imprecise, incomplete or untrue.

8. The Authority must, within a predetermined period of 45 days from the start of the examination provided for in the present Article, inform the undertakings concerned and the Minister of Industry, Commerce and Crafts of its conclusions on the matter. This period may be extended in the course of the examination for a period not exceeding 30 days if the undertakings do not supply the information and the data available to them which is requested.

ARTICLE 17

Temporary suspension of concentration

1. In carrying out the examination provided for in Article 16, the Authority may order the undertakings concerned to suspend the completion of the concentration until the examination has been concluded.

Rules for the Protection of Competition and the Market

2. The provision contained in paragraph 1 shall not prevent the completion of a takeover bid which has been notified to the Authority in pursuance of Article 14 paragraph 5 subject to the acquirer not exercising the voting rights conferred by the securities in question.

ARTICLE 18
Conclusion of examination of concentrations

1. If, after the examination provided for in Article 16, the Authority ascertains that a concentration falls within the framework of those referred to in Article 6, it shall prohibit its enforcement.

2. In cases where, in the course of the examination, insufficient evidence comes to light to justify intervention against a concentration, the Authority shall close the examination and immediately inform the undertakings concerned and the Minister of Industry, Commerce and Crafts of its conclusions on the matter. This measure may be adopted at the request of the undertakings concerned as a means of proving that they have eliminated from the original concentration plan factors which might possibly involve distortions of competition.

3. If the concentration operation has already been completed, the Authority may lay down the necessary measures to re-establish conditions of effective competition, eliminating the distorting effects.

ARTICLE 19
Administrative fines for failure to comply with the ban on concentrations or with the notification requirement

1. In cases where the undertakings complete a concentration in contravention of the ban referred to in Article 18 paragraph 1 or where they fail to comply with the provisions referred to in paragraph 3 of the same Article, the Authority shall impose administrative fines ranging from a minimum of one per cent to a maximum of ten per cent of the turnover of the undertakings which are the subjects of the concentration.

2. In the case of undertakings which have failed to comply with the prior notification requirements laid down in Article 16 paragraph 1, the Authority may impose administrative fines on the same undertakings at a rate of one per cent of the turnover for the year preceding that in which the notice was made, to be added to any penalties applying in pursuance of paragraph 1 as a result of the conclusions of the examination provided for by the present Title III, the start of which shall be fixed at the date of notification of the penalty referred to in the present paragraph.

CHAPTER IV
SPECIAL PROVISIONS

ARTICLE 20
Credit companies, insurance companies and the broadcasting and publishing sectors

1. The application of Articles 2, 3, 4 and 6 to undertakings operating in the broadcasting and publishing sectors shall fall within the competence of the authority provided for by the legislation in force for the broadcasting and publishing sectors.

Rules for the Protection of Competition and the Market

2. The application of Articles 2, 3, 4 and 6 to credit companies shall fall within the competence of the relevant supervisory authority.

3. The measures of the supervisory authorities referred to in paragraphs 1 and 2 in pursuance of Articles 2, 3, 4 and 6 shall be adopted following consultation of the Authority safeguarding competition and the market as referred to in Article 10, which shall issue an opinion within a period of 30 days from receipt of the documentation on which the measure is based. After this time limit has passed the supervisory authority may adopt the measure on its own competence.

4. In the case of operations involving insurance companies, the measures of the Authority provided for in Article 10 shall be adopted after consultation of the Institute for the Supervision of Private and Collective Insurance (ISVAP), which shall issue an opinion within a period of 30 days from receipt of the documentation on which the measure is based. After this time limit has passed the Authority referred to in Article 10 may adopt the measure on its own competence.

5. The supervisory authority for credit companies may also authorize, for a limited period, cartels derogating from the ban in Article 2 on grounds of the stability requirements of the monetary system, bearing in mind the criteria referred to in Article 4 paragraph 1. Such authorization shall be adopted by agreement with the Authority referred to in Article 10, which shall assess whether or not the cartel involves the elimination of competition.

6. The Authority referred to in Article 10 may notify the supervisory authorities referred to in paragraphs 1 and 2 of a possible continuing infringement of Articles 2 and 3.

7. By way of derogation from the provisions of the preceding paragraphs, where the cartel, abuse of a dominant position or concentration relate to undertakings operating in sectors subjects to the supervision of more than one authority, each of those authorities may adopt measures falling within its competence.

8. The supervisory authorities referred to in the present Article shall operate according to the procedure laid down for the Authority referred to in Article 10.

9. The provisions of the present Law on concentrations shall not constitute a derogation from the standards in force in the banking, insurance, broadcasting and publishing sectors.

TITLE III

THE AUTHORITY'S POWERS OF INFORMATION AND CONSULTATION

ARTICLE 21

Power of communication to Parliament and the Government

1. In order to contribute to the more effective protection of competition and the market, the Authority shall identify particularly important cases in which legislative or regulatory standards or general administrative provisions produce distortions of competition or of the correct functioning of the market which are not justified by general interest requirements.

2. The Authority shall notify situations in which distortions arise from legislative provisions to Parliament and to the President of the Council of Ministers and, in

Rules for the Protection of Competition and the Market

other cases, to the President of the Council of Ministers, to the competent Ministers and to the local and regional authorities concerned.

3. The Authority shall, if it is advisable, issue an opinion on the measures necessary to eliminate or prevent distortions and may publish the cases notified and the opinions in the appropriate way even based on the nature and the importance of the distortions concerned.

ARTICLE 22
Consultation activities

1. The Authority may express opinions on legislative or regulatory initiatives and on problems relating to competition and the market if it considers this appropriate or at the request of the authorities and public bodies concerned. The President of the Council of Ministers may request an opinion from the Authority on legislative or regulatory initiatives which have the direct effect of:

- a) Subjecting the exercise of an activity or access to a market to quantitative restrictions;
- b) Establishing exclusive rights in certain areas;
- c) Imposing generalized practices relating to prices and conditions of sale.

ARTICLE 23
Annual report

1. Before 30 April of each year the Authority shall submit to the President of the Council of Ministers a report on its activities throughout the preceding year. The President of the Council of Ministers shall, within a period of 30 days, convey the report to Parliament.

ARTICLE 24
Report to the Government on certain sectors

1. After consulting the authorities concerned, the Authority shall within 18 months of its appointment, submit to the President of the Council of Ministers a report on the actions to be taken to adapt to the principles of competition the regulations on the award of public contracts, public utilities and commercial distribution.

TITLE IV
RULES CONCERNING GOVERNMENT POWERS ON CONCENTRATIONS

ARTICLE 25
Government powers on concentrations

1. The Council of Ministers shall, on a proposal from the Minister of Industry, Commerce and Crafts, lay down generally and in advance criteria on the basis of which the Authority may exceptionally, for reasons of the general interest of the national economy within the framework of European integration, authorize concentrations which are prohibited in pursuance of Article 6, provided they do not involve the elimination of competition from the market or restrictions on competition which are not strictly justified by the above-mentioned general interest. In such cases, and

Rules for the Protection of Competition and the Market

whatever the circumstances, the Authority shall lay down the necessary measures to re-establish conditions of full competition within a predetermined period.

2. In the case of concentrations as referred to in Article 16 involving bodies or undertakings from countries which do not protect the independence of bodies or undertakings by means of standards producing effects similar to those of the preceding Titles or which apply discriminatory provisions or which impose clauses having similar effects in relation to acquisitions by Italian undertakings or bodies, the President of the Council of Ministers, following discussion with the Council of Ministers, may, on a proposal from the Minister of Industry, Commerce and Crafts, within a period of 30 days from the notification referred to in Article 16 paragraph 3, prohibit the concentration on essential grounds relating to the national economy.

ARTICLE 26
Publishing of decisions

1. The decisions referred to in Articles 15, 16, 18, 19 and 25 shall be published within a period of 20 days by the Presidency of the Council of Ministers in a bulletin produced for this purpose. The conclusions of the examinations referred to in Article 12 paragraph 2 shall also, if the Authority considers it appropriate, be published in this bulletin.

TITLE V

RULES ON SHAREHOLDINGS IN CREDIT INSTITUTIONS

ARTICLE 27
Shareholdings in credit institutions

1. The purchase or subscription of shares or of holdings in credit institutions by any person, directly or through controlled companies, trust companies or intermediaries, must be authorized by the Bank of Italy where, taking account also of shares or holdings already owned, it involves a shareholding exceeding five per cent of the capital of the credit institution and, whatever this threshold, where it involves control of the credit institution. Authorization shall also be required to take control of a company which holds shares in a credit institution exceeding the above-mentioned limit.

2. For the purposes of the present Title, control shall be deemed to exist, in pursuance of Article 2359 of the Civil Code, even where a single member or more than one member belonging to a voting syndicate — in which case each of them is considered to exercise control — owns more than one-quarter of the total number of ordinary shares or holdings or more than one-tenth in the case of a company whose shares are quoted on the Stock Exchange and provided no member or other voting syndicate composed of other members has a greater total number of ordinary shares or holdings or otherwise controls the company. By voting syndicate shall be understood any agreement between members governing the casting of votes. Any agreement governing the casting of votes must be notified to the Bank of Italy within a period of 48 hours from the date on which it is signed.

3. Operations referred to in paragraph 1 which, taking account also of shares and holdings already owned, involve a shareholding not exceeding five per cent but exceeding one per cent of the capital and transfer operations relating to shares or hold-

Rules for the Protection of Competition and the Market

ings already owned involving a reduction in the shareholding exceeding one per cent must be notified to the Bank of Italy within a period of 48 hours from the date on which they are signed.

4. Where the shareholding exceeds five per cent of the capital of the credit institution renewed authorization shall be required for subsequent variations which, on their own or jointly with preceding variations, involve an increase or reduction in the shareholding exceeding two per cent of the capital of the credit institution.

5. If a person authorized in pursuance of the preceding paragraphs no longer fulfils a number of the conditions which made the authorization necessary, he must notify the Bank of Italy of this within a period of 15 days. In cases where a person no longer fills such conditions as a consequence of an operation involving control of a credit establishment being transferred to another person, the operation must receive the prior authorization of the Bank of Italy.

6. Persons other than credit institutions and financial bodies or companies and companies or financial bodies which control such persons or are controlled by them shall not be authorized to purchase or subscribe, directly or through controlled companies, trust companies or intermediaries, shares or holdings in a credit institution which, with those already held, involve a shareholding exceeding 15 per cent of the capital of the institution in order to take control of it. However, if control is taken through membership of voting syndicates as referred to in paragraph 2, authorization may be granted if the applicant's membership of the syndicate, taking account also of shares and holdings already owned and controlled, is not a decisive factor in forming the majority required by the resolutions of the syndicate itself.

7. Holdings exceeding one per cent of the capital of credit institutions which are in existence on the date of entry into force of the present Law must be notified to the Bank of Italy by registered letter within a period of 60 days, specifying any situations which do not conform to those which may be authorized pursuant to the present Article and the number of shares or holdings bought after 25 January 1989. Shareholdings exceeding five per cent and those involving control of the credit institution may be deemed to be authorized if the Bank of Italy does not decide otherwise within a period of 180 days from the date of despatch of the notification. This time limit shall be suspended in cases where additional information or data is requested from the interested party and it shall restart from the date of despatch of such information. Such a request may be repeated only once. The powers of revocation referred to in Article 28 paragraph 2 shall be an exception. Within a period of one year from the date of entry into force of the present Law, the Treasury Minister shall inform Parliament of the list of shareholdings exceeding the limit laid down in paragraph 6 which have been authorized in pursuance of the present paragraph. Shareholdings in existence on the date of entry into force of the present Law which are owned by public bodies, including economic bodies, shall be deemed to be authorized independently of notification.

8. If bodies or undertakings from countries which do not protect the independence of credit institutions by means or rules having an effect equivalent to that of the present Title or which apply discriminatory provisions or which impose clauses having similar effects in respect of purchases by Italian undertakings or bodies are found to be involved in operations as referred to in paragraph 1, the Bank of Italy shall notify the application for authorization to the Treasury Minister, on a proposal from whom the President of the Council of Ministers may, even on essential grounds relat-

Rules for the Protection of Competition and the Market

ing to the national economy, prohibit authorization within a period of one month from the notification.

ARTICLE 28
Authorization and notification

1. Persons who wish to be granted authorization as referred to in Article 27 must apply to the Bank of Italy by registered letter. Authorization shall be deemed to be granted if the Bank of Italy fails to react within a period of 90 days from the date of despatch of the registered letter. The time limit shall be suspended if additional information or data is requested from the interested party and shall restart from the date of despatch of the registered letter sent in reply; the request for information and data may be repeated only once.

2. Even if authorization is granted tacitly it may at any time be suspended or revoked by the Bank of Italy, taking account of positions acquired or reinforced as a result of agreements as referred to in Article 27 paragraph 2 or of other events subsequent to authorization.

3. Measures taken by the Bank of Italy shall be notified to the applicant and to the credit institution concerned. Reasons must be given for measures which refuse, revoke or suspend authorization.

4. The Interministerial Committee on Credit and Savings shall lay down the criteria for the granting, suspension and revocation of authorization with a view to safeguarding the independence of the credit institution and protecting the interests of depositors, taking account also of the position of the directors, trustees, general directors and liquidators of companies which have applied for and obtained authorization and those of the companies or bodies to which the credit institution's shareholdings relate, and of connections of a technical, financial, organizational or contractual nature which exist between the applicant and other persons, with regard to the prevention of any dominant influence. The Interministerial Committee on Credit and Savings shall furthermore, on a proposal from the Bank of Italy, issue appropriate provisions under the terms of which shareholders having holdings involving a requirement to apply for authorization must sign a declaration of responsibility (known as the autonomy protocol) at any time for the Bank of Italy and, whatever the circumstance, for every application for authorization to take or increase shareholdings. The Interministerial Committee on Credit and Savings shall, on a proposal from the Bank of Italy, generally establish maximum amounts, criteria, rules of procedure and requirements in respect of the case in question referred to in Article 27 paragraph 6. The Interministerial Committee on Credit and Savings may, in the same resolution, on a proposal from the Bank of Italy, issue provisions in pursuance of the present Law for credit institutions in respect of the definition of a dominant influence and the configuration of the major associate. The Bank of Italy may also give instructions for the safeguarding of the attributive neutrality of credit institutions. The resolutions of the Interministerial Committee on Credit and Saving shall be published in the *Gazzetta Ufficiale* of the Italian Republic.

5. Specimens for applications for authorization and the documentation to be supplied and specimens of the notifications referred to in Article 27 paragraphs 3, 5 and 7 shall be drawn up by the Bank of Italy and published in the *Gazzetta Ufficiale* of the Italian Republic.

Rules for the Protection of Competition and the Market

ARTICLE 29

Suspension of voting rights, compulsory transfer, penal sanctions

1. The voting rights conferred by the shares or holdings acquired or subscribed referred to in Article 27 may not be exercised before notification of the authorization measure, nor before application has been made for the latter, nor before notification or refusal, suspension or revocation of authorization, nor before the end of the time limit laid down in Article 28 paragraph 1. In the case of non-compliance, appeal may be made against the resolution under the terms of Article 2377 of the Civil Code if the required majority could not be achieved without the votes conferred by these actions or holdings. Distrainment may also be proposed by the Bank of Italy. The actions or holdings in respect of which voting rights may not be exercised shall be accounted for with a view to the regular constitution of the meeting.

2. Shares or holdings owned by a person as referred to in Article 27 paragraph 6 which exceed 15 per cent of the capital of the credit institution or confer control of it must be transferred within six months following the approval of the budget in which they appear; in the case of those which are in existence on the date of entry into force of the present Law and which have been notified to the Bank of Italy in pursuance of Article 27 paragraph 7, the time limit shall run from the date of notification of the provision which provides for it. In the case of non-completion, the courts shall, at the request of the Bank of Italy, order the sale of the shares or holdings through a broker or a credit company or institution.

3. In the case of failure to apply for authorization, failure to notify or incomplete or false notification as provided in Article 27 and of infringement of the provisions of paragraphs 1 and 2, the directors and general directors of the companies or of the body and the associates who fail to make notification as provided in Article 27 paragraph 2 shall, except where the facts constitute a more serious misdemeanour, be liable to imprisonment of between one and five years and to a fine of ITL 4 to 20 million.

4. The provisions of the present Article shall also apply to shares and holdings not exceeding five per cent of the capital of the credit institution which confer control of that institution by means of agreements as referred to in Article 27 paragraph 2 or of other events subsequent to their purchase or subscription.

Positions as referred to in Article 27 shall be excluded subject to an application for authorization to purchase or subscribe the shares or holdings on which they are based, with retroactive effects, within a period of 48 hours from the decision by the voting syndicate or from the participation of the latter, and to the granting of such authorization by the Bank of Italy in accordance with the provisions of Article 28.

ARTICLE 30

Conflicts of interest

1. Credit institutions must, in granting loans to persons who have links with them or who hold a large portion of their capital or funds, comply with the limits set by the Bank of Italy in pursuance of the directives of the Interministerial Committee on Credit and Savings.

2. Such limits shall be determined by exclusive reference to the credit institution's assets and to the shareholding owned by the borrower himself.

3. The Interministerial Committee on Credit and Savings shall draw up directives

Rules for the Protection of Competition and the Market

on the subjects of conflicts of interest between credit institutions and their major shareholders relating to other banking activities.

TITLE VI
FINAL PROVISIONS

ARTICLE 31
Penalties

1. In setting the administrative fines resulting from the infringement of the present Law, it shall be appropriate to observe, insofar as they apply, the provisions contained in Chapter I, Sections I and II of Law No. 689 of 24 November 1981.

ARTICLE 32
Financial cover

1. The costs arising from the application of the present Law, which are assessed at ITL 20 billion for 1990, ITL 32 billion for 1991 and ITL 35 billion for 1992, shall be covered by a corresponding reduction in the allocations entered in the three-year budget 1990-1992 under chapter 6856 of the Treasury Ministry's provisional statement for the year 1990, making use for this purpose of the special reserve «Action to safeguard competition and the market».

ARTICLE 33
Jurisdiction

1. Appeals against the administrative provisions adopted on the basis of the provisions contained in Titles I to IV of the present Law shall come under the exclusive jurisdiction of the administrative judiciary. They must be submitted to the Regional Administrative Court of Latium.

2. Actions for avoidance and indemnification of damages and appeals for the purpose of obtaining emergency measures relating to the infringement to the provisions contained in Titles I to IV shall be submitted to the competent Court of Appeal.

ARTICLE 34
Entry into force

1. The present Law shall enter into force on the day following that of its publication in the *Gazzetta Ufficiale* of the Italian Republic.

Annex II

JAMAICA
(Original: English)

THE FAIR COMPETITION ACT, 1993
(Act 9 of 1993)

ARRANGEMENT OF SECTIONS

1. Short title.

PART I. Preliminary

2. Interpretation.
3. Application of Act.

PART II. The Fair Trading Commission

4. Establishment of Commission.
5. Functions of the Commission.
6. Commission shall seek information.
7. Powers of the Commission.
8. Hearings to be held in public.
9. Minister may give directions.
10. Powers of entry and search, etc.
11. Discontinuance of investigation.

Financial Provisions, Accounts and Reports

12. Funds of Commission.
13. Accounts and audit.
14. Reports.

Appointment of Staff

15. Appointment of Executive Director, Secretary and other employees.
16. Pensions, gratuities and other retiring benefits.

ii

[No. 9] *The Fair Competition Act, 1993*

PART III. *Control of Uncompetitive Practice*

17. Provisions of agreement having effect of lessening competition.
18. Agreements containing exclusionary provisions void.
19. Existence of dominant position.
20. Abuse of dominant position.
21. Action in relation to abuse of dominant position.

PART IV. *Resale Price Maintenance*

Collective Resale Price Maintenance

22. Collective agreement by suppliers prohibited.
23. Collective agreement by dealers.
24. Application of sections 22 and 23 to associations.

Individual Minimum Resale Price Maintenance

25. Minimum resale price maintained by contract or agreement.
26. Patented goods under section 25.
27. Maintenance of minimum resale prices by other means.
28. Interpretation.

PART V. *Authorizations.*

29. Grant of authorizations.
30. Effect of authorization.
31. Revocation of authorization.
32. Register of authorizations.

PART VI. *Exclusive Dealing, Tied Selling and Market Restriction*

33. Exclusive dealing.

PART VII. *Offences against Competition*

34. Price fixing.
35. Conspiracy.
36. Bid-rigging.
37. Misleading advertising.

The Fair Competition Act, 1993

[No. 9]

iii

38. Representation as to reasonable test and publication of testimonials.
39. Double ticketing.
40. Sale at bargain price.
41. Sale above advertised price.
42. Obstruction of investigation.
43. Destruction of records, etc.
44. Giving false or misleading information to Commission.
45. Failure to attend and give evidence.

PART VIII. Enforcement, remedies and appeals.

46. Application for enforcement.
47. Power of Court.
48. Civil liability.
49. Appeals against finding of Commission.
50. Operation of Order pending determination of appeal.

PART IX. General

51. Exemption from income tax, stamp duties, transfer tax and customs duty.
52. Regulations.
53. Powers of Commission to prohibit disclosure of information, documents and evidence.
54. Application to the Crown.
55. Transitional.

SCHEDULE.

JAMAICA

No. 9—1993

I assent,

[L.S.]

HOWARD COOKE,
Governor-General,

9th day of March, 1993.

AN ACT to Provide for the maintenance and encouragement of competition in the conduct of trade, business and in the supply of services in Jamaica with a view to providing consumers with competitive prices and product choices.

[9th March, 1993]

BE IT ENACTED by The Queen's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Representatives of Jamaica, and by the authority of the same, as follows:—

1. This Act may be cited as the Fair Competition Act, short title. 1993.

PART I. Preliminary

Interpreta-
tion.

2.—(1) In this Act, unless the context otherwise requires—

“acquire”—

(a) in relation to goods, includes obtain by way of gift, purchase or exchange, and by way of lease, hire or hire purchase;

(b) in relation to services, includes accept.

“advertisement” means any form of communication made to the public or a section of the public for the purpose of promoting the supply of goods or services;

“agreement” includes any agreement, arrangement or understanding whether oral or in writing or whether or not it is or is intended to be legally enforceable;

“authorized officer” means any officer of the Commission authorized by the Commission to assist it in the performance of its functions under this Act;

“business” means any activity that is carried on for gain or reward or in the course of which goods or services are manufactured, produced or supplied, including the export of goods from Jamaica;

“Commission” means the Fair Trading Commission established under section 4;

“consumer” means any person who is either—

(a) a person to whom goods are or are intended to be supplied in the course of a business carried on by the supplier or potential supplier;

(b) a person for whom services are supplied in the course of a business carried on by the supplier or potential supplier,

and who does not seek to receive the goods or services in the course of a business carried on by him;

“Court” means the Supreme Court;

“dealer” means a person carrying on a business of supplying goods, whether by wholesale or retail;

“employee” means a person who works under a contract of employment;

“enterprise” means any person who carries on business in Jamaica but does not include a person who—

- (a) works under a contract of employment; or
- (b) holds office as director or secretary of a company and in either case is acting in that capacity;

“functions” includes powers and duties;

“goods” means all kinds of property other than real property, money, securities or choses in action;

“group”, where the reference is to a group of persons fulfilling specified conditions (other than the condition of being interconnected companies), means any two or more persons fulfilling those conditions, whether or not, apart from fulfilling them they would be regarded as constituting a group;

“group of interconnected companies” means a group consisting of two or more companies all of which are interconnected with each other;

“interconnected company” shall be construed in accordance with subsection (2) (a);

“price” includes any charge or fee, by whatever name called;

“service” means a service of any description whether industrial, trade, professional or otherwise;

“supply”—

- (a) in relation to goods, includes supply or re-supply by way of gift, sale, exchange, lease, hire or hire purchase;
- (b) in relation to services, does not include the rendering of any services, under a contract of employment but includes—
 - (i) the performance of engagements, for gain or reward (including professional engagements) for any matter; and
 - (ii) the rendering of services to order, and the provision of services by making them available to potential users,

and “supplier” shall be construed accordingly;

“trade” means any trade, business, industry, profession or occupation, relating to the supply or acquisition of goods or services.

(2) For the purposes of this Act—

- (a) any two companies are to be treated as interconnected companies if one of them is a company of which the other is a subsidiary or if both of them are subsidiaries of the same company;
- (b) a group of interconnected companies shall be treated as a single enterprise.

(3) Every reference in this Act to the term “market” is a reference to a market in Jamaica for goods or services as well as other goods or services that, as a matter of fact and commercial commonsense, are substitutable for them.

(4) References in this Act to the lessening of competition shall, unless the context otherwise requires, include references to hindering or preventing competition.

(5) For the purposes of this Act, the effect on competition in a market shall be determined by reference to all factors that affect competition in that market, including competition from goods or services supplied or likely to be supplied by persons not resident or carrying on business in Jamaica.

3. Nothing in this Act shall apply to—

Application
of Act.

- (a) combinations or activities of employees for their own reasonable protection as employees;
- (b) arrangements for collective bargaining on behalf of employers and employees for the purpose of fixing terms and conditions of employment;
- (c) the entering into of an agreement in so far as it contains a provision relating to the use, licence or assignment of rights under or existing by virtue of any copyright, patent or trade mark;
- (d) the entering into or carrying out of such an agreement or the engagement in such business practice, as is authorized by the Commissioner under Part V;
- (e) any act done to give effect to a provision of an arrangement referred to in paragraph (c);
- (f) activities expressly approved or required under any treaty or agreement to which Jamaica is a party;
- (g) activities of professional associations designed to develop or enforce professional standards of competence reasonably necessary for the protection of the public;
- (h) such other business or activity declared by the Minister by order subject to affirmative resolution.

PART II.—*The Fair Trading Commission*

Establish-
ment of
Commis-
sion.

4.—(1) There is hereby established for the purposes of this Act, a body to be called the Fair Trading Commission which shall be a body corporate to which section 28 of the Interpretation Act shall apply.

Schedule.

(2) The provisions of the Schedule shall have effect as to the constitution of the Commission and otherwise in relation thereto.

Functions
of the
Commis-
sion.

5.—(1) The functions of the Commission shall be—

- (a) to carry out, on its own initiative or at the request of any person such investigations in relation to the conduct of business in Jamaica as will enable it to determine whether any enterprise is engaging in business practices in contravention of this Act and the extent of such practices;
- (b) to carry out such other investigations as may be requested by the Minister or as it may consider necessary or desirable in connection with matters falling within the provisions of this Act;
- (c) to advise the Minister on such matters relating to the operation of this Act, as it thinks fit or as may be requested by the Minister;
- (d) to investigate on its own initiative or at the request of any person adversely affected and take such action as it considers necessary with respect to the abuse of a dominant position by any enterprise; and
- (e) to carry out such other duties as may be prescribed by or pursuant to the Act.

(2) It shall be the duty of the Commission—

- (a) to make available—
 - (i) to persons engaged in business, general information with respect to their rights and obligations under this Act;

- (ii) for the guidance of consumers, general information with respect to the rights and obligations of persons under this Act affecting the interests of consumers;
- (b) to undertake studies and publish reports and information regarding matters affecting the interests of consumers;
- (c) to co-operate with and assist any association or body of persons in developing and promoting the observance of standards of conduct for the purpose of ensuring compliance with the provisions of this Act.

6. The Commission shall obtain such information as it considers necessary to assist it in its investigation and, where it considers appropriate, shall examine and obtain verification of documents submitted to it.

Commission shall seek information.

7.—(1) For the purposes of carrying out its functions under this Act, the Commission is hereby empowered to—

Power of the Commission.

- (a) summon and examine witnesses;
- (b) call for and examine documents;
- (c) administer oaths;
- (d) require that any document submitted to the Commission be verified by affidavit;
- (e) adjourn any investigation from time to time.

(2) The Commission may hear orally any person who, in its opinion, will be affected by an investigation under this Act, and shall so hear the person if the person has made a written request for a hearing, showing that he is an interested party likely to be affected by the result of the investigation or that there are particular reasons why he should be heard orally.

(3) The Commission may require a person engaged in business or a trade or such other person as the Commission considers appropriate, to state such facts concerning

goods manufactured, produced or supplied by him or services supplied by him as the Commission may think necessary to determine whether the conduct of the business in relation to the goods or services constitutes an uncompetitive practice.

(4) If the information specified in subsection (3) is not furnished to the satisfaction of the Commission, it may make a finding on the basis of the information available before it.

Hearings to
be held in
public.

8. Hearings of the Commission shall take place in public but the Commission may, whenever the circumstances so warrant, conduct a hearing in private.

Minister
may give
directions.

9.—(1) The Minister may give to the Commission such directions of a general nature as the Minister considers necessary in the public interest as to the policy to be followed by the Commission.

(2) The Commission shall give effect to any directions given pursuant to subsection (1).

Powers of
entry and
search, etc.

10.—(1) Subject to this section, the Commission may, for the purpose of ascertaining whether any person has engaged or is engaging in conduct constituting or likely to constitute a contravention of this Act, require an authorized officer to enter and search any premises and inspect and remove for the purpose of making copies, any documents or extracts therefrom in the possession or under the control of any person.

(2) An authorized officer shall not exercise the powers conferred by subsection (1) unless he obtains a warrant authorizing him to exercise those powers in accordance with subsection (4).

(3) Where a Justice of the Peace is satisfied on information on oath that there is reasonable ground for believing that any person has engaged or is engaging in

conduct constituting or likely to constitute a contravention of this Act, the Justice of the Peace may by warrant under his hand, permit an authorized officer to exercise the powers conferred by subsection (1) in relation to any premises specified in the warrant, so, however, that such warrant shall not authorize the detention of a document for a period exceeding seven days.

(4) An authorized officer shall—

- (a) on entering any premises pursuant to a warrant issued under subsection (3), produce evidence of his authority to enter the premises and evidence of his identity;
- (b) upon completing a search authorized under this section, leave a receipt listing documents or extracts therefrom removed for the purposes of this section.

(5) The occupier or person in charge of any premises entered pursuant to this section shall provide the authorized officer with all reasonable facilities and assistance for the effective exercise of his functions under this section.

11.—(1) At any stage of an investigation under this Act, if the Commission is of the opinion that the matter being investigated does not justify further investigation, the Commission may discontinue the investigation. Discontinu-
ance of
investiga-
tion.

(2) The Commission shall, on discontinuing an inquiry, make a report in writing to the Minister stating the information obtained and the reason for discontinuing the investigation.

Financial Provisions, Accounts and Reports

12.—The funds of the Commission shall consist of—

- (a) such sums as may be appropriated by Parliament for the purposes of this Act;

Funds of
Commis-
sion.

- (b) any other moneys which may in any manner become payable to or vested in the Commission in respect of any matter incidental to his functions.

Accounts
and audit.

13.—(1) The accounts of the Commission shall be audited annually by the Auditor-General or by any auditor or auditors approved by him and a statement of accounts so audited shall form part of the annual report referred to in section 14 (1).

(2) The Commission shall, in each year, before a date specified by the Minister—

- (a) submit to the Minister a statement of accounts audited in accordance with subsection (1);
- (b) submit to the Minister for approval estimates of revenue and expenditure for the financial year next following.

Reports.

14.—(1) The Commission shall, within three months after the end of each financial year, or within such longer period as the Minister may in special circumstances allow, cause to be made and transmitted to the Minister a report dealing generally with the activities of the Commission during the preceding financial year.

(2) The Commission may from time to time furnish to the Minister a report relating to any particular matter or matters investigated, or being investigated which, in the opinion of the Commission, require the special attention of the Minister.

(3) The Minister shall cause a copy of a report submitted under this section to be laid on the Table of the House of Representatives and of the Senate.

Appointment of Staff

Appoint-
ment of
Executive
Director,
Secretary
and other
employees.

15.—(1) The Commission shall appoint and employ an Executive Director who shall hold office for a period of seven years and may be re-appointed for periods not exceeding five years at a time.

(2) The Executive Director shall be in charge of the day to day management of the Commission.

(3) Subject to subsection (4), the Executive Director shall receive such emoluments and be subject to such terms and conditions of service as may from time to time be prescribed by or under any law or by a resolution of the House of Representatives.

(4) The emoluments and terms and conditions of service of the Executive Director, other than allowances that are not taken into account in computing pensions, shall not be altered to his disadvantage during the period of his appointment or reappointment, as the case may be.

(5) The emoluments for the time being payable to the Executive Director by virtue of this Act shall be charged on and paid out of the Consolidated Fund.

(6) The Commission may appoint and employ at such remuneration and on such terms and conditions as it thinks fit, such other officers and employees as it thinks necessary for the proper carrying out of the provisions of this Act:

Provided that—

- (a) no salary in excess of the prescribed rate shall be assigned to any post without the prior approval of the Minister; and
- (b) no appointment shall be made without the prior approval of the Minister to any post to which a salary in excess of the prescribed rate is assigned.

(7) In subsection (3) “the prescribed rate” means a rate of \$100,000 per annum or such higher rate as the Minister may, by order, prescribe.

(8) The Governor-General may, subject to such conditions as he may impose, approve of the appointment of any officer in the service of the Government to any office with the Commission, and any officer so appointed shall, during such appointment, in relation to pension, gratuity or other allowance, and to other rights as a public officer, be treated as continuing in the service of the Government.

Pensions,
gratuities
and other
retiring
benefits.

16. The Commission may enter into arrangements respecting schemes, whether by way of insurance policies or not for medical benefits, pensions, gratuities and other retiring or disability or death benefits relating to employees of the Commission and such arrangements may include provisions for the grant of benefits to the dependants and the legal personal representatives of such employees.

PART III. *Control of Uncompetitive Practice*

Provisions
of agree-
ment
having
effect of
lessening
competition.

17.—(1) This section applies to agreements which contain provisions that have as their purpose the substantial lessening of competition, or have or are likely to have the effect of substantially lessening competition in a market.

(2) Without prejudice to the generality of subsection (1) agreements referred to in that subsection include agreements which contain provisions that—

- (a) directly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading conditions;
- (b) limit or control production, markets, technical development or investment;
- (c) share markets or sources of supply;
- (d) affect tenders to be submitted in response to a request for bids;
- (e) apply dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage;

- (f) make the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts,

being provisions which have or are likely to have the effect referred to in subsection (1).

(3) Subject to subsection (4), no person shall give effect to any provision of an agreement which has the purpose or effect referred to in subsection (1); and no such provision is enforceable.

(4) Subsection (3) does not apply to any agreement or category of agreements the entry into which has been authorized under Part V or which the Commission is satisfied—

(a) contributes to—

- (i) the improvement of production or distribution of goods and services; or
- (ii) the promotion of technical or economic progress,

while allowing consumers a fair share of the resulting benefit;

- (b) imposes on the enterprises concerned only such restrictions as are indispensable to the attainment of the objectives mentioned in paragraph (a); or
- (c) does not afford such enterprises the possibility of eliminating competition in respect of a substantial part of the goods or services concerned.

18.—(1) For the purposes of this Act, a provision of an agreement is an exclusionary provision if—

- (a) the agreement is entered into or arrived at between persons of whom any two or more are in competition with each other; and

**Agreements
containing
exclusionary
provisions
void.**

- (b) the effect of the provision is to prevent, restrict or limit the supply of goods or services to, or the acquisition of goods or services from, any particular person or class of persons either generally or in particular circumstances or in particular conditions, by all or any of the parties to the agreement or, if a party is a company, by an interconnected company.

(2) For the purposes of subsection (1), a person is in competition with another person if that person or any interconnected company is, or is likely to be or, but for the relevant provision, would be or would be likely to be, in competition with the other person or with an interconnected company, in relation to the supply or acquisition of all or any of the goods or services to which that relevant provision relates.

(3) No person shall give effect to an exclusionary provision of an agreement.

Existence
of dominant
position.

19. For the purposes of this Act an enterprise holds a dominant position in a market if by itself or together with an interconnected company, it occupies such a position of economic strength as will enable it to operate in the market without effective constraints from its competitors or potential competitors.

Abuse of
dominant
position.

20.—(1) An enterprise abuses a dominant position if it impedes the maintenance or development of effective competition in a market and in particular but without prejudice to the generality of the foregoing, if it—

- (a) restricts the entry of any person into that or any other market;
- (b) prevents or deters any person from engaging in competitive conduct in that or any other market;
- (c) eliminates or removes any person from that or any other market;

- (d) directly or indirectly imposes unfair purchase or selling prices or other uncompetitive practices;
- (e) limits production of goods or services to the prejudice of consumers;
- (f) makes the conclusion of agreements subject to acceptance by other parties of supplementary obligations which by their nature, or according to commercial usage, have no connection with the subject of such agreements.

(2) An enterprise shall not be treated as abusing a dominant position—

(a) if it is shown that—

- (i) its behaviour was exclusively directed to improving the production or distribution of goods or to promoting technical or economic progress; and
- (ii) consumers were allowed a fair share of the resulting benefit;

(b) by reason only that the enterprise enforces or seeks to enforce any right under or existing by virtue of any copyright, patent, registered design or trade mark.

21.—(1) Where the Commission finds that an enterprise has abused or is abusing a dominant position and that such abuse has had or is having the effect of lessening competition substantially in a market, the Commission shall—

Action in relation to abuse of dominant position.

- (a) notify the enterprise of its finding; and
- (b) direct the enterprise to take such steps as are necessary and reasonable to overcome the effects of abuse in the market concerned.

(2) In determining, for the purposes of subsection (1) whether a practice has had, is having or is likely to have the effect of lessening competition substantially in a

market, the Commission shall consider whether the practice is a result of superior competitive performance.

(3) For the purposes of this section, an act is not an uncompetitive practice if it is engaged in pursuant only to the exercise of any right or enjoyment of an interest derived under any Act pertaining to intellectual or industrial property.

PART IV. Resale Price Maintenance

Collective Resale Price Maintenance

Collective agreements by suppliers prohibited.

22.—(1) It is unlawful for any two or more enterprises, being suppliers of goods, to enter into or carry out any agreement by virtue of which they undertake—

- (a) to withhold supplies of goods from dealers (whether parties to the agreement or not) who resell or have resold goods in breach of any condition as to the price at which those goods may be resold;
- (b) to refuse to supply goods to such dealers except on terms and conditions which are less favourable than those applicable in the case of other dealers carrying on business in similar circumstances;
- (c) to supply goods only to persons who undertake or have undertaken to do any of the acts described in paragraph (a) or (b).

(2) It is unlawful for any two or more enterprises referred to in subsection (1) to enter into or carry out any agreement authorizing—

- (a) the recovery of penalties (however described) by or on behalf of the parties to the agreement from dealers who resell or have resold goods in breach of any such condition as described in subsection (1) (a); or
- (b) the conduct of any proceedings in connection therewith.

23.—(1) It is unlawful for any two or more enterprises, being dealers in any goods, to enter into or carry out any agreement by which they undertake—

Collective agreement by dealers.

- (a) to withhold orders for supplies of goods from suppliers (whether parties to the agreement or not)—
 - (i) who supply or have supplied goods without imposing such a condition as is described in section 22 (1) (a); or
 - (ii) who refrain or have refrained from taking steps to ensure compliance with such conditions in respect of goods supplied by them; or
- (b) to discriminate in their handling of goods against goods supplied by those suppliers.

(2) It is unlawful for any two or more enterprises referred to in subsection (1) to enter into or carry out an agreement authorizing—

- (a) the recovery of penalties (however described) by or on behalf of the parties to the agreement from the suppliers referred to in subsection (1); or
- (b) the conduct of any proceedings in connection therewith.

24. Sections 22 and 23 apply in relation to an association whose members consist of or include—

Application of sections 22 and 23 to associations.

- (a) enterprises which are suppliers or dealers in any goods; or
- (b) representatives of such enterprises, as they apply to an enterprise.

Individual Minimum Resale Price Maintenance

25.—(1) Any term or condition of an agreement for the sale of goods by a supplier to a dealer is void to the extent that it purports to establish or provide for the establishment of minimum prices to be charged on the resale of the goods in Jamaica.

Minimum resale price maintained by contract or agreement.

(2) Subject to subsections (3) and (4), it is unlawful for a supplier of goods (including an association or person acting on behalf of such supplier) to—

- (a) include in an agreement for the sale of goods, a term or condition which is void by virtue of this section;
- (b) require, as a condition of supplying goods to a dealer, the inclusion in the agreement of any term or condition, or the giving of any undertaking to the like effect;
- (c) notify to dealers, or otherwise publish on or in relation to any goods, a price stated or calculated to be understood as the minimum price which may be charged on the resale of the goods in Jamaica.

(3) Paragraph (a) of subsection (2) does not affect the enforceability of an agreement except in respect of the term or condition which is void by virtue of this section.

(4) Nothing in paragraph (c) of subsection (2) shall be construed as precluding a supplier (or an association or person acting on behalf of a supplier) from notifying to dealers or otherwise publishing prices recommended as appropriate for the resale of goods supplied or to be supplied by the supplier.

Patented
goods under
section 25.

26.—(1) Section 25 applies to patented goods (including goods made by a patented process) as it applies to other goods.

(2) Notice of any term or condition which is void by virtue of section 25, or which would be so void if included in an agreement relating to the sale of any such goods, is of no effect for the purpose of limiting the right of a dealer to dispose of those goods without infringement of the patent.

(3) Nothing in section 25 and in this section affects the validity, as between the parties and their successors, of any term or condition—

(a) of a licence granted by the proprietor of a patent or by a licensee under any such licence; or

(b) of any assignment of a patent,

so far as it regulates the price at which goods produced or processed by the licensee or assignee may be sold by him.

27.—(1) It is unlawful for a supplier to withhold supplies of any goods from a dealer seeking to obtain them for resale on the ground that the dealer—

Maintenance of minimum resale prices by other means.

(a) has sold goods obtained either directly or indirectly from that supplier, at a price below the resale price or has supplied such goods either directly or indirectly to a third party who had done so; or

(b) is likely, if the goods are supplied by him, to sell them at a price below that price, or supply them either directly or indirectly to a third party who would be likely to do so.

(2) In this section “the resale price”, in relation to a sale of any description, means—

(a) any price notified to the dealer or otherwise published by or on behalf of a supplier of the goods in question (whether lawfully or not) as the price or minimum price which is to be charged on or is recommended as appropriate for a sale of that description; or

(b) any price prescribed or purporting to be prescribed for that purpose by an agreement between the dealer and any such supplier.

(3) Where under this section it would be unlawful for a supplier to withhold supplies of goods, it is also unlawful for him to cause or procure any other supplier to do so.

28.—(1) For the purposes of this Part, a supplier of goods shall be treated as withholding supplies from a dealer—

Interpretation.

(a) if he refuses or fails to supply those goods to the order of the dealer;

- (b) if he refuses to supply those goods to that dealer except at prices, or on terms or conditions as to credit, discount or other matters, which are significantly less favourable than those at or on which he normally supplies those goods to other dealers carrying on business in similar circumstances; or
- (c) if, although he enters into an agreement to supply goods to the dealer, he treats him in a manner significantly less favourable than that in which he normally treats other such dealers in respect of times or methods of delivery or other matters arising in the execution of the agreement.

(2) A supplier shall not be treated as withholding supplies of goods on any ground mentioned in section 27 (1) if, in addition to that ground, he has other grounds which, standing alone, would have led him to withhold those supplies.

(3) Subject to subsection (4), if, in proceedings brought against a supplier of goods in respect of a contravention of section 27 (1), it is proved that supplies of goods were withheld by the supplier from a dealer, and it is further proved that—

- (a) during a period ending immediately before the supplies were so withheld, the supplier was doing business with the dealer or was supplying goods of the same description to other dealers carrying on business in similar circumstances; and
- (b) the dealer, to the knowledge of the supplier, had within the preceding six months acted as described in section 27 (1) (a) or had indicated his intention to act as described in section 27 (1) (b) in relation to the goods in question,

it shall be presumed, unless the contrary is proved, that the supplies were withheld on the ground that the dealer had so acted or was likely so to act.

(4) Subsection (3) does not apply where the proof that supplies were withheld consists only of evidence of requirements imposed by the supplier in respect of the time at which or the form in which payment was to be made for goods supplied or to be supplied.

PART V. *Authorizations.*

29.—(1) Subject to subsection (2), any person who proposes to enter into or carry out an agreement or to engage in a business practice which in the opinion of that person, is an agreement or practice affected or prohibited by this Act, may apply to the Commission for an authorization to do so.

Grant of authorization.

(2) In respect of an application under subsection (1), the Commission—

- (a) may notwithstanding any other provision of this Act, if it is satisfied that the agreement or practice, as the case may be, is likely to promote the public benefit grant an authorization subject to such terms and conditions as it thinks fit; or
- (b) may refuse to grant an authorization and if it does so, the Commission shall inform the applicant in writing of its reasons for refusal.

30. While an authorization granted under section 29 remains in force, nothing in this Act shall prevent the person to whom it is granted from giving effect to any agreement or any provision of an agreement or from engaging in any practice to which the authorization relates.

Effect of authorization.

31.—(1) Subject to subsection (2), the Commission may revoke or amend an authorization if it is satisfied that—

Revocation of authorization.

- (a) the authorization was granted on information that was false or misleading;
- (b) there has been a breach of any terms or condition subject to which the authorization was granted.

(2) The Commission shall, before revoking or amending an authorization, serve on the relevant applicant a notice in writing specifying the default and inform him of his right to apply to the Commission to be heard on the matter within such time as may be specified in the notice.

Register of
authori-
zations.

32.—(1) The Commission shall keep a register, in such form as it may determine, of authorizations granted under this Part.

(2) The register shall be kept at the office of the Commission and shall be available for inspection by members of the public at all reasonable times.

PART VI. *Exclusive Dealing, Tied Selling and Market Restriction*

Exclusive
dealing.

33.—(1) For the purposes of this section—
“exclusive dealing” means—

- (a) any practice whereby a supplier of goods, as a condition of supplying the goods to a customer requires that customer to—
 - (i) deal only or primarily in goods supplied by or designated by the supplier or his nominee; or
 - (ii) refrain from dealing in a specified class or kind of goods except as supplied by the supplier or his nominee; and
- (b) any practice whereby a supplier of goods induces a customer to meet a condition referred to in sub-paragraph (a) by offering to supply the goods to the customer on more favourable terms or conditions if the customer agrees to meet that condition;

“market restriction” means any practice whereby a supplier of goods, as a condition of supplying the goods to a customer, requires that customer to supply any goods only in a defined market, or exacts a penalty of any kind from the customer if he supplies any goods outside a defined market;

“tied selling” means—

- (a) any practice whereby a supplier of an article, as a condition of supplying the article (in this section referred to as the “tied article”) to a customer, requires the customer to—
 - (i) acquire any other article from the supplier or his nominee;
 - (ii) refrain from using or distributing, in conjunction with the tied article, another article that is not of a brand or manufacture designated by the supplier or the nominee; and
- (b) any practice whereby a supplier of an article induces a customer to meet a condition set out in paragraph (a) by offering to supply the tied article to the customer on more favourable terms or conditions if the customer agrees to meet that condition.

(2) Where on investigation the Commission finds that an enterprise is engaging in tied selling, the Commission shall prohibit that enterprise from so doing.

(3) Where on investigation the Commission finds that exclusive dealing or market restriction, because it is engaged in by a major supplier of goods in a market or because it is widespread in a market, is likely to—

- (a) impede entry into or expansion of an enterprise in the market;

- (b) impede introduction of goods into or expansion of sales of goods in the market; or
- (c) have any other exclusionary effect in the market, with the result that competition is or is likely to be lessened substantially, the Commission may prohibit that supplier from continuing to engage in market restriction or exclusive dealing and to take such other action as, in the Commission's opinion, is necessary to restore or stimulate competition in relation to the goods.

(4) The Commission shall not take action under this section where, in its opinion exclusive dealing or market restriction is or will be engaged in only for a reasonable period of time to facilitate entry of a new supplier of goods into a market or of new goods into a market and this section shall not apply in respect of exclusive dealing or market restriction between or among interconnected companies.

PART VII. Offences against Competition

Price
fixing.

34.—(1) A person who is engaged in the business of producing or supplying goods shall not, directly or indirectly—

- (a) by agreement, threat, promise or any like means, attempt to influence upward or discourage the reduction of, the price at which any other person supplies or offers to supply or advertises goods;
- (b) refuse to supply goods to or otherwise discriminates against any other person engaged in business;
- (c) refuse to supply goods to or otherwise discriminates against any other person engaged in business because of the low pricing policy of that other person.

(2) Subsection (1) does not apply where the person attempting to influence the conduct of another person and that other person—

- (a) are interconnected companies; or

(b) principal and agent.

(3) For the purposes of this section, a suggestion by a producer or supplier of goods of a resale price or minimum resale price in respect thereof, however arrived at, is proof of an attempt to influence the person to whom the suggestion is made, unless it is proved that the person making the suggestion, in so doing, also made it clear to the person to whom it was made that he was under no obligation to accept it and would in no way suffer in his business relations with the person making the suggestion or with any other person if he failed to accept the suggestion.

(4) For the purposes of this section, the publication by a supplier of goods other than a retailer, of an advertisement that mentions a resale price for the goods is an attempt to influence upward the selling price of any person into whose hands the goods come for resale unless the price is so expressed as to make it clear to any person who becomes aware of the advertisement that the goods may be sold at a lower price.

35.—(1) No person shall conspire, combine, agree or arrange with another person to— **Conspiracy.**

- (a) limit unduly the facilities for transporting, producing, manufacturing, storing or dealing in any goods or supplying any service;
- (b) prevent, limit or lessen unduly, the manufacture or production of any goods or to enhance unreasonably the price thereof;
- (c) lessen unduly, competition in the production, manufacture, purchase, barter, sale, supply, rental or transportation of any goods or in the price of insurance on persons or property;
- (d) otherwise restrain or injure competition unduly.

(2) Nothing in subsection (1) applies to a conspiracy, combination, agreement or arrangement which relates only

to a service and to standards of competence and integrity that are reasonably necessary for the protection of the public—

- (a) in the practice of a trade or profession relating to the service; or
- (b) in the collection and dissemination of information relating to the service.

Bid-rigging.

36.—(1) Subject to subsection (2), it is unlawful for two or more persons to enter into an agreement whereby—

- (a) one or more of them agree or undertake not to submit a bid in response to a call or request for bids or tenders; or
- (b) as bidders or tenderers they submit, in response to a call or request, bids or tenders that are arrived at by agreement between or among themselves.

(2) This section shall not apply in respect of an agreement that is entered into or a submission that is arrived at only by companies each of which is, in respect of every one of the others, an affiliate.

Misleading advertising.

37.—(1) A person shall not, in pursuance of trade and for the purpose of promoting, directly or indirectly, the supply or use of goods or services or for the purpose of promoting, directly or indirectly, any business interest, by any means—

- (a) make a representation to the public that is false or misleading in a material respect;
- (b) make a representation to the public in the form of a statement, warranty or guarantee of performance, efficacy or length of life of goods that is not based on an adequate and proper test thereof, the proof of which lies on the person making the representation;
- (c) make a representation to the public in the form of a statement, warranty or guarantee that services

are of a particular kind, standard, quality, or quantity, or that they are supplied by any particular person or by any person of a particular trade, qualification or skill;

(d) make a representation to the public in a form that purports to be—

(i) a warranty or guarantee of any goods; or

(ii) a promise to replace, maintain or repeat an article or any part thereof or to repeat or continue service until it has achieved a specified result,

if the form of purported warranty or guarantee or promise is materially misleading or if there is no reasonable prospect that it will be carried out;

(e) make a materially misleading representation to the public concerning the price at which any goods or services or like goods or services have been, are or will be ordinarily supplied.

(2) For the purposes of paragraph (e) of subsection (i), a representation as to price is to be construed as referring to the price at which the goods or services have been supplied generally in the relevant market unless it is clearly specified to be the price at which the goods or services have been supplied by the person by whom or on whose behalf the representation is made.

(3) For the purposes of this section and section 38, the following types of representation shall be deemed to be made to the public by and only by the person who caused it to be expressed, made or contained, that is to say, a representation that is—

(a) expressed on an article offered or displayed for sale;

(b) expressed on anything attached to, inserted in or accompanying an article offered or displayed for sale, its wrapper or container, or anything on which the article is mounted for display or sale;

- (c) expressed on a display in the place where the article is sold;
- (d) made in the course of selling the article to the ultimate consumer;
- (e) contained in or on anything that is sold, sent, delivered, transmitted or in any other manner made available to a member of the public.

(4) Where the person referred to in subsection (3) is outside of Jamaica, the representation shall be deemed to be made—

- (a) in the case described in paragraph (a), (b) or (e) of that subsection, by the person who imported the article; and
- (b) in a case described in paragraph (c) of that subsection, by the person who imported the display into Jamaica.

(5) Subject to subsections (3) and (4), every person who, for the purpose of promoting, directly or indirectly, the supply or use of any goods or any business interest, supplies to a wholesaler, retailer or other distributor of goods any material or thing that contains a representation of a kind referred to in subsection (1) shall be deemed to have made that representation to the public.

Representation as to reasonable test and publication of testimonials.

38. A person shall not, for the purpose of promoting, directly or indirectly, the supply or use of any goods, or for the purpose of promoting, directly or indirectly any business interest—

- (a) make a representation to the public that a test as to the performance, efficacy or length of life of the goods has been made by any person; or
- (b) publish a testimonial with respect to the goods, unless he can establish that—
 - (i) the representation or testimonial was previously made or published by the person by

whom the test was made or the testimonial was given, as the case may be; or

- (ii) before the representation or testimonial was made or published, it was approved and permission to make or publish it was given in writing by the person who made the test or gave the testimonial, as the case may be,

and it accords with the representation or testimonial previously made, published or approved.

39. A person shall not supply any article at a price that exceeds the lowest of two or more prices clearly expressed by him or on his behalf, in respect of the article in the quantity in which it is so supplied at the time at which it is so supplied—

Double
ticketing.

- (a) on the article, its wrapper or container;
- (b) on anything attached to, inserted in or accompanying the article, its wrapper or container or anything on which the article is mounted for display or sale; or
- (c) on a display or advertisement at the place at which the article is purchased.

40.—(1) For the purposes of this section, “bargain price” means—

Sale at
bargain
price.

- (a) a price that is represented in an advertisement to be a bargain price by reference to an ordinary price or otherwise; or
- (b) a price so represented in an advertisement, that a person who reads, hears or sees the advertisement would reasonably understand to be a bargain price by reason of the prices at which the goods advertised or like articles are ordinarily sold.

(2) A person shall not advertise at a bargain price goods which he—

- (a) does not intend to supply; or

- (b) does not have reasonable grounds for believing he can supply,

at that price for a period that is, and in quantities that are, reasonable having regard to the nature of the market in which he carries on business, the nature and size of his enterprise and the nature of the advertisement.

(3) Subsection (2) does not apply where the person who is advertising proves that—

- (a) he took reasonable steps to obtain in adequate time a quantity of the article that would have been reasonable having regard to the nature of the advertisement, but was unable to obtain such a quantity by reason of events beyond his control that he could not reasonably have anticipated;
- (b) he obtained a quantity of the article that was reasonable having regard to the nature of the advertisement, but was unable to meet the demand therefor because that demand surpassed his reasonable expectations; or
- (c) after he became unable to supply the article in accordance with the advertisement, he undertook to supply the same article or equivalent article of equal or better quality at the bargain price and within a reasonable time to all persons who requested the article and who were not supplied therewith during the time when the bargain price applied and that he fulfilled the undertaking.

Sale above
advertised
price.

41.—(1) A person who advertises goods for sale or rent in a market shall not, during the period and in the market to which the advertisement relates, supply goods at a price that is higher than that advertised.

(2) This section shall not apply in respect of—

- (a) an advertisement that appears in a catalogue or other publication in which it is prominently stated

that the prices contained therein are subject to error of the person establishes that the price advertised is in error;

- (b) an advertisement that is immediately followed by another advertisement correcting the price mentioned in the first advertisement.

(3) For the purposes of this section, the market to which an advertisement relates shall be deemed to be the market to which it could reasonably be expected to reach, unless the advertisement defines market specifically by reference to a geographical area, store, sale by catalogue or otherwise.

42. Any person who, in any manner, impedes, prevents or obstructs any investigation by the Commission under this Act or any authorized officer in the execution of his duties under this Act is guilty of an offence and liable on conviction in a Circuit Court to a fine or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both such fine and imprisonment.

Obstruction
of investi-
gation.

43. Every person who—

- (a) refuses to produce any document, record or thing, or to supply any information, when required to do so by the Commission under this Act; or
- (b) destroys or alters or causes to be destroyed or altered, any document, record or thing required to be so produced or in respect of which a warrant is issued under this Act,

Destruction
of records,
etc.

is guilty of an offence and liable on conviction in a Circuit Court to a fine or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both such fine and imprisonment.

44. Any person who gives to the Commission or an authorized officer any information which he knows to be false or misleading is guilty of an offence and liable on conviction in a Circuit Court to a fine or to imprisonment for

Giving false
or mislead-
ing infor-
mation to
Commis-
sion.

a term not exceeding five years or to both such fine and imprisonment.

Failure to attend and give evidence.

45. Any person who—

- (a) refuses or fails to comply with a requirement of the Commission under this Act;
- (b) having been required to appear before the Commission—
 - (i) without reasonable excuse refuses or fails so to appear and give evidence;
 - (ii) refuses to take an oath or make an affirmation as a witness;
 - (iii) refuses to answer any question put to him,

is guilty of an offence and liable on conviction before a Resident Magistrate to a fine not exceeding twenty thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both such fine and imprisonment.

PART VIII. Enforcement, Remedies and Appeals

Application for enforcement.

46. If the Court is satisfied on an application by the Commission that any person—

- (a) has contravened any of the obligations or prohibitions imposed in Part III, IV, VI or VII; or
- (b) has failed to comply with any direction of the Commission,

the Court may exercise any of the powers referred to in section 47.

Powers of Court.

47.—(1) Pursuant to section 45 the Court may—

- (a) order the offending person to pay to the Crown such pecuniary penalty not exceeding 1 million dollars in the case of an individual and not exceeding 5 million dollars in the case of a person other than an individual;

- (b) grant an injunction restraining the offending person from engaging in conduct described in paragraph (a) or (b) of section 45,

in respect of each contravention or failure referred to in section 45.

(2) In exercising its powers under this section the Court shall have regard to—

- (a) the nature and extent of the default;
- (b) the nature and extent of any loss suffered by any person as a result of the default;
- (c) the circumstances of the default;
- (d) any previous determination against the offending person.

(3) The standard of proof in proceedings under this section and section 47 shall be the standard of proof applicable in civil proceedings.

48.—(1) Every person who engages in conduct which constitutes— Civil
liability.

- (a) a contravention of any of the obligations or prohibitions imposed in Parts III, IV, VI or VII;
- (b) aiding, abetting, counselling or procuring the contravention of any such provision;
- (c) inducing by threats, promises, or otherwise the contravention of any such provision;
- (d) being knowingly conceived in or party to any such contravention; or
- (e) conspiring with any other person to contravene any such provision,

is liable in damages for any loss caused to any other person by such conduct.

(2) An action under subsection (1) may be commenced at any time within three years from the time when the cause of action arose.

Appeals
against
finding of
Commis-
sion.

49.—(1) Any person who is aggrieved by a finding of the Commission may within fifteen days after the date of that finding, appeal to a Judge in Chambers.

(2) The Judge in Chambers may—

- (a) confirm, modify or reserve the findings of the Commission or any part thereof; or
- (b) direct the Commission to reconsider, either generally or in respect of any specified matters, the whole or any specified part of the matter to which the appeal relates.

(3) In giving any direction under this section, the Judge shall—

- (a) advise the Commission of his reasons for doing so; and
- (b) give to the Commission such directions as he thinks just concerning the reconsideration or otherwise the whole or any part of the matter that is referred back for reconsideration.

(4) In reconsideration of the matter, the Commission shall have regard to the Judge's reasons for giving a direction under subsection (1) and the Judge's directions under subsection (3).

Operation
of order.
pending
determina-
tion of
appeal.

50. Where an appeal is brought against any findings of the Commission any directions or order of the Commission based on such findings shall remain in force pending the determination of the appeal, unless the Judge otherwise orders.

PART IX.—*General*

51.—(1) The income of the Commission shall be exempt from income tax.

Exemption from income tax, stamp duties, transfer tax and customs duty.

(2) The Commission shall be exempt from stamp duty on all instruments executed by it or on its behalf.

(3) There shall be exempt from taxation under the Transfer Tax Act any transfer by the Commission of property belonging to it or of any right or interest created in, over or otherwise with respect to any such property.

(4) No customs duty or other similar impost shall be payable upon any article imported into Jamaica, or taken out of bond in Jamaica, by the Commission, and shown to the satisfaction of the Commissioner of Customs to be required for the use of the Commission in the performance of its functions under this Act.

52. The Commission may, with the approval of the Minister, make regulations generally for giving effect to the provisions of this Act and, without prejudice to the generality of the foregoing, may make regulations—

Regulations.

- (a) prescribing the procedure to be followed in respect of applications and notices to, and proceedings of, the Commission;
- (b) prescribing any other matters which are required by this Act to be prescribed.

53.—(1) The Commission may prohibit the publication or communication of any information furnished or obtained, documents produced, obtained or tendered, or evidence given to the Commission in connection with the operations of the Commission.

Powers of Commission to prohibit disclosure of information, documents and evidence

(2) Every person who publishes or communicates any such information, documents or evidence the publication of

which is prohibited by the Commission under subsection (1) is guilty of an offence and liable on summary conviction before a Resident Magistrate to a fine not exceeding one hundred thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both such fine and imprisonment.

Application
to the
Crown.

54. Subject to any provision to the contrary in or under this or any other Act, this Act binds the Crown.

Transi-
tional.

55.—(1) A provision in an agreement in force at the date of commencement of this Act which would, but for the provisions of this section, be unenforceable, shall continue to be enforceable for a period of six months from that date.

(2) For a period of six months from the said date this Act shall not apply in relation to any business practice which, but for the provisions of this section, would be affected or prohibited by this Act.

SCHEDULE

(Section 4)

The Fair Trading Commission

- 1.—(1) The Commission shall consist of such number of persons not being less than three nor more than five as the Minister may from time to time appoint. Constitu-
tion of
Commis-
sion.
- (2) The Executive Director shall be a member *ex officio* of the Commission.
- 2.—(1) The members referred to in paragraph 1 (1) shall be appointed by the Minister by instrument in writing. Appoint-
ment of
directors.
- (2) A member other than the Executive Director, shall, subject to the provisions of this Schedule, hold office for such period not exceeding three years, as the Minister may specify in the instrument appointing the member and each member shall be eligible for reappointment.
3. The Minister shall appoint one of the members of the Commission referred to in paragraph 1 (1) to be chairman thereof. Chairman.
4. If the chairman or any other member of the Commission is absent or unable to act, the Minister may appoint any person to act in the place of the chairman or other member. Acting
appoint-
ments.
- 5.—(1) Any member other than the chairman or the Executive Director may at any time resign his office by instrument in writing addressed to the Minister and transmitted through the chairman, and from the date of the receipt by the Minister of that instrument, that member shall cease to be a member of the Commission. Resigna-
tions.
- (2) The chairman may at any time resign his office by instrument in writing addressed to the Minister, and such resignation shall take effect as from the date on which the Minister receives that instrument.
6. The Minister may terminate the appointment of any member other than Executive Director if such member— Revocation
of appoint-
ments.
- (a) becomes of unsound mind or becomes permanently unable to perform his functions by reason of ill health;
- (b) is convicted and sentenced to a term of imprisonment;
- (c) fails without reasonable excuse to carry out any of the functions conferred or imposed on him under this Act; or
- (d) engages in such activities as are reasonably considered prejudicial to the interest of the Commission.
7. The names of all members of the Commission as first constituted and every change of membership shall be published in the *Gazette*. Gazetting
of appoint-
ments.

38

[No. 9]

The Fair Competition Act, 1993

Leave of absence.

8. The Minister may, on the application of any member other than the Executive Director, grant leave of absence to the member.

Seal and execution of documents.

9.—(1) The seal of the Commission shall be kept in the custody of the Executive Director or the Secretary and shall be affixed to instruments pursuant to a resolution of the Commission, in the presence of the Executive Director or any other member of the Commission, and the secretary thereof.

(2) The seal of the Commission shall be authenticated by the signatures of the Executive Director or any other member authorized to act in that behalf, and the secretary.

(3) All documents other than those required by law to be under seal, made by, and all decisions of, the Commission may be signified under the hand of the Executive Director or any other member of the Commission authorized to act in that behalf and the secretary.

Procedure and meetings.

10.—(1) The Commission shall meet as often as may be necessary or expedient for the transaction of its business and such meetings shall be held at such places and times and on such days as the Commission may determine.

(2) The Chairman may at any time call a special meeting of the Commission, and shall call a special meeting to be held within seven days of receipt of a written request for that purpose addressed to him by any two members of the Commission.

(3) The chairman shall preside at all meetings of the Commission, and if the chairman is absent from a meeting the members present and constituting a quorum shall elect one of their number to preside at the meeting.

(4) The quorum of the Commission shall be three.

(5) The decisions of the Commission shall be by a majority of votes, and, in addition to an original vote the chairman or other person presiding at the meeting shall have a casting vote in any case in which the voting is equal.

(6) Minutes in proper form of each meeting of the Commission shall be kept and shall be confirmed as soon as practicable thereafter at a subsequent meeting.

(7) Subject to the provisions of this Schedule the Commission may regulate its own proceedings.

Disclosure of interest.

11. A member who is directly or indirectly interested in any matter which is being dealt with by the Commission—

- (a) shall disclose the nature of his interest at a meeting of the Commission; and
- (b) shall not take part in any deliberation or decision of the Commission with respect to that matter.

12. No act done or proceeding taken under this Act shall be questioned on the ground—

- (a) of the existence of any vacancy in the membership of, or any defect in the constitution of the Commission; or
- (b) of any omission, defect or irregularity not affecting the merits of the case.

Protection
of Commis-
sion.

13.—(1) No action, suit or other proceedings shall be brought or instituted personally against any member in respect of any act done *bona fide* in the course of carrying out the provisions of this Act.

Protection
of members.

(2) Where any member is exempt from liability by reason only of the provisions of this paragraph, the Commission shall be liable to the extent that it would be if that member were a servant or agent of the Commission.

14. There shall be paid from the funds of the Commission to the chairman and other members of the Commission such remuneration whether by way of honorarium, salary or fees, and such allowances as the Minister may determine.

Remunera-
tion of
members.

15. The office of a member other than the Executive Director shall not be a public office for the purposes of Chapter V of the Constitution of Jamaica.

Office of
member
other than
Executive
Director,
not public
office.

Annex III

VENEZUELA

(Original: English and Spanish)

GACETA OFICIAL

DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA

AÑO CXIX — MES III

Caracas: lunes 30 de diciembre de 1991

No. 4353 Extraordinario

SUMARIO

Congreso de la República

Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia.

CONGRESO DE LA REPUBLICA

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA

DECRETA

la siguiente.

LEY PARA PROMOVER Y PROTEGER EL EJERCICIO DE LA LIBRE COMPETENCIA

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES

- ARTICULO 1°.- Esta Ley tiene por objeto promover y proteger el ejercicio de la libre competencia y la eficiencia en beneficio de los productores y consumidores y prohibir las conductas y prácticas monopólicas y oligopólicas y demás medios que puedan impedir, restringir, falsear o limitar el goce de la libertad económica.
- ARTICULO 2°.- Se aplicará el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena cuando se produzcan efectos restrictivos sobre la libre competencia en el mercado Subregional Andino.
- ARTICULO 3°.- A los efectos de esta Ley se entiende por libertad económica, el derecho que tienen todas las personas a dedicarse a la actividad económica de su preferencia sin más limitaciones que las derivadas de los derechos de los demás y las que establezcan la Constitución y leyes de la República.

Se entiende por actividad económica, toda manifestación de producción o comercialización de bienes y de prestación de servicios dirigida a la obtención de beneficios económicos.

Se entiende por libre competencia, aquella actividad en la cual existan las condiciones para que cualquier sujeto económico, sea oferente o demandante, tenga completa libertad de entrar o salir del mercado, y quienes están dentro de él, no tengan posibilidad, tanto individualmente como en colusión con otros, de imponer alguna condición en las relaciones de intercambio.

TITULO II AMBITO DE APLICACION DE LA LEY

Capítulo I Sujetos de aplicación

- ARTICULO 4°.- Quedan sometidas a esta Ley todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que, con o sin fines de lucro, realicen actividades económicas en el territorio nacional o agrupen a quienes realicen dichas actividades.

Capítulo II Actividades reguladas

Sección Primera Prohibición General

- ARTICULO 5°.- Se prohíben las conductas, prácticas, acuerdos, convenios, contratos o decisiones que impidan, restrinjan, falseen o limiten la libre competencia.

Sección Segunda Prohibiciones particulares

- ARTICULO 6°.- Se prohíben las actuaciones o conductas de quienes, no siendo titulares de un derecho protegido por la Ley, pretendan impedir u obstaculizar la entrada o la permanencia de empresas, productos o servicios en todo o parte del mercado.
- ARTICULO 7°.- Se prohíben las acciones que se realicen con intención de restringir la libre competencia, a incitar a terceros sujetos de esta Ley a no aceptar la entrega de bienes o la prestación de servicios; a impedir su adquisición o prestación; a no vender materias primas o insumos o prestar servicios a otros.
- ARTICULO 8°.- Se prohíbe toda conducta tendiente a manipular los factores de producción, distribución, desarrollo tecnológico o inversiones, en perjuicio de la libre competencia.
- ARTICULO 9°.- Se prohíben los acuerdos o convenios, que se celebren directamente o a través de uniones, asociaciones, federaciones, cooperativas y otras agrupaciones de sujetos de aplicación de esta Ley, que restrinjan o impidan la libre competencia entre sus miembros.
- Se prohíben los acuerdos o decisiones tomados en asambleas de sociedades mercantiles y civiles contrarios a los fines anteriormente señalados.
- ARTICULO 10.- Se prohíben los acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas o prácticas concertadas para:

- 1° Fijar, de forma directa o indirecta, precios y otras condiciones de comercialización o de servicio;
- 2° Limitar la producción, la distribución y el desarrollo técnico o tecnológico de las inversiones;
- 3° Repartir los mercados, áreas territoriales, sectores de suministro o fuentes de aprovisionamiento entre competidores;
- 4° Aplicar en las relaciones comerciales o de servicios, condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación de desventaja frente a otros; y
- 5° Subordinar o condicionar la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos del comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos.

ARTICULO 11.- Se prohíben las concentraciones económicas, en especial las que se produzcan en el ejercicio de una misma actividad, cuando a consecuencia de ellas se generen efectos restrictivos sobre la libre competencia o se produzca una situación de dominio en todo o parte del mercado.

ARTICULO 12.- Se prohíben los contratos entre los sujetos de esta Ley, referidos a bienes y servicios, en la medida en que establezcan precios y condiciones de contratación para la venta de bienes o prestación de servicios a terceros, y que tengan la intención o produzcan o puedan producir el efecto de restringir, falsear, limitar o impedir la libre competencia en todo o parte del mercado.

ARTICULO 13.- Se prohíbe el abuso por parte de uno o varios de los sujetos de esta Ley de su posición de dominio, en todo o parte del mercado nacional y, en particular, quedan prohibidas las siguientes conductas:

- 1° La imposición discriminatoria de precios y otras condiciones de comercialización o de servicios;
- 2° La limitación injustificada de la producción, de la distribución o del desarrollo técnico o tecnológico en perjuicio de las empresas o de los consumidores;
- 3° La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o de prestación de servicios;
- 4° La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación de desventaja frente a otros;
- 5° La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos del comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos; y
- 6° Otras de efecto equivalente.

ARTICULO 14.- A los efectos de esta Ley, existe posición de dominio:

- 1° Cuando determinada actividad económica es realizada por una sola persona o grupo de personas vinculadas entre sí, tanto en condición de comprador como de vendedor y tanto en su condición de prestador de servicios como en su calidad de usuario de los mismos; y
- 2° Cuando existiendo más de una persona para la realización de determinado tipo de actividad, no haya entre ellas competencia efectiva.

ARTICULO 15.- Se tendrá como personas vinculadas entre sí a las siguientes:

- 1° Personas que tengan una participación del cincuenta por ciento (50%) o más del capital de la otra o ejerzan de cualquier otra forma el control sobre ella;
- 2° Las personas cuyo capital sea poseído en un cincuenta por ciento (50%) o más por las personas indicadas en el ordinal anterior, o que estén sometidas al control por parte de ellas; y
- 3° Las personas que, de alguna forma, estén sometidas al control de las personas que se señalan en los ordinales anteriores.

PARAGRAFO UNICO: Se entiende por control a la posibilidad que tiene una persona para ejercer una influencia decisiva sobre las actividades de uno de los sujetos de aplicación de esta Ley, sea mediante el ejercicio de los derechos de propiedad o de uso de la totalidad o parte de los activos de éste, o mediante el ejercicio de derechos o contratos que permitan influir decisivamente sobre la composición, las deliberaciones o las decisiones de los órganos del mismo o sobre sus actividades.

ARTICULO 16.- A los efectos de establecer si existe competencia efectiva en una determinada actividad económica, deberán tomarse en consideración los siguientes aspectos: El número de competidores que participen en la respectiva actividad, la cuota de participación de ellos en el respectivo mercado, la capacidad instalada de los mismos, la demanda del respectivo producto o servicio, la innovación tecnológica que afecte el mercado de la respectiva actividad, la posibilidad legal y fáctica de competencia potencial en el futuro y el acceso de los competidores a fuentes de financiamiento y suministro, así como a las redes de distribución.

PARAGRAFO UNICO: Cuando la posición de dominio se derive de la ley, las personas que se encuentren en esa situación, se ajustarán a las disposiciones de esta Ley, en cuanto no se hayan estipulado condiciones distintas en los cuerpos normativos que la regulen, conforme a lo dispuesto en el Artículo 97 de la Constitución.

Sección Tercera *De la Competencia Desleal*

ARTICULO 17.- Se prohíbe el desarrollo de políticas comerciales que tendan a la eliminación de los competidores a través de la competencia desleal y, en especial, las siguientes:

- 1° La publicidad engañosa o falsa dirigida a impedir o limitar la libre competencia;

- 2º La promoción de productos y servicios con base en declaraciones falsas, concernientes a desventajas o riesgos de cualquier otro producto o servicio de los competidores; y
- 3º El soborno comercial, la violación de secretos industriales y la simulación de productos.

*Sección Cuarta
Del Régimen de Excepciones*

ARTICULO 18.- El Presidente de la República, en Consejo de Ministros y oída la opinión de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, fijará las normas dentro de las cuales podrá permitirse la realización de las siguientes actividades:

- 1º La fijación directa o indirecta, individual o concertada de precios de compra o venta de bienes o servicios;
- 2º La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones diferentes para prestaciones similares o equivalentes que ocasionen desigualdades en la situación competitiva, especialmente si son distintas de aquellas condiciones que se exigirían si hubiera una competencia efectiva en el mercado, salvo los casos de descuentos por pronto pago, descuentos por volúmenes, menor costo del dinero por ofrecer menor riesgo y otras ventajas usuales en el comercio; y
- 3º Las representaciones territoriales exclusivas y las franquicias con prohibiciones de comerciar otros productos.

PARAGRAFO UNICO: Al fijar las normas dentro de las cuales podrá permitirse la realización de las actividades señaladas en los ordinales anteriores, el Ejecutivo Nacional de manera concurrente, cumplirá con lo siguiente:

- 1º La autorización de dichas actividades deberá tener por objeto, contribuir a mejorar la producción, la comercialización y la distribución de bienes y la prestación de servicios o a promover el progreso técnico o económico;
- 2º Las actividades que se autoricen deberán aportar ventajas para los consumidores o usuarios;
- 3º La autorización previa de las actividades que se permitan, así como el control de su ejecución, por la Superintendencia; y
- 4º La autorización sólo contendrá lo indispensable para lograr el objeto que se persigue.

**TITULO III
DE LA SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCION
Y PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA**

*Capítulo I
De su Régimen Interior*

ARTICULO 19.- Se crea la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia con autonomía funcional en las materias de su competencia, adscrita administrativamente al Ministerio de Fomento.

ARTICULO 20.- La Superintendencia tendrá su sede en la ciudad de Caracas; pero, podrá establecer dependencias en otras ciudades del país, si así lo considerase necesario.

ARTICULO 21.- La Superintendencia estará a cargo de un Superintendente designado por el Presidente de la República.

ARTICULO 22.- El Superintendente tendrá un Adjunto designado por el Presidente de la República. Ambos durarán cuatro (4) años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser designados para ejercer nuevos periodos.

Las faltas temporales del Superintendente serán suplidas por el Adjunto.

Las faltas absolutas del Superintendente y del Adjunto serán suplidas por quienes designe el Presidente de la República para el resto del periodo.

ARTICULO 23.- El Superintendente y el Adjunto deberán ser mayores de treinta (30) años, de reconocida probidad y experiencia en asuntos financieros, económicos y mercantiles, vinculados a las materias propias de esta Ley.

PARAGRAFO UNICO: No podrán ser designados Superintendente y Superintendente Adjunto:

- 1º Los declarados en quiebra, culpable o fraudulenta, y los condenados por delitos o faltas contra la propiedad, contra la fe pública o contra el patrimonio público;
- 2º Quienes tengan con el Presidente de la República, con el Ministro de Fomento, o con algún miembro de la Superintendencia, parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o sean cónyuges de alguno de ellos;
- 3º Los deudores de obligaciones morosas, bancarias o fiscales;
- 4º Los miembros de las direcciones de los partidos políticos, mientras estén en el ejercicio de sus cargos;
- 5º Los funcionarios, directores o empleados de las personas naturales o jurídicas a que se refiere esta Ley; y
- 6º Quienes estén desempeñando funciones públicas remuneradas.

ARTICULO 24.- El Superintendente y el Adjunto no podrán ser removidos de sus cargos sino por los siguientes supuestos:

- 1) En caso de condena penal;
- 2) Por incompatibilidad sobrevenida; y
- 3) Por incumplimiento de los deberes del cargo y por ineptitud plenamente comprobada.

ARTICULO 25.- La Superintendencia contará con una Sala de Sustanciación, la cual tendrá las atribuciones que le señalan esta Ley, su Reglamento y el Reglamento Interno de la Superintendencia.

La Sala de Sustanciación estará a cargo del Superintendente Adjunto y contará con funcionarios

instructores en número suficiente que permitan garantizar la celeridad en la decisión de las materias de competencia de la Superintendencia.

ARTICULO 26.- El Superintendente no podrá desempeñar ninguna otra función, pública o privada, salvo las académicas y docentes que no menoscaben el cumplimiento de sus deberes y funciones.

ARTICULO 27.- Los funcionarios de la Superintendencia, serán de libre nombramiento y remoción por el Superintendente.

ARTICULO 28.- Los funcionarios de la Superintendencia que hayan investigado una empresa, no podrán trabajar para ésta ni para ninguna otra que tenga vinculación accionaria directa o indirecta, con dicha empresa, dentro del año siguiente a la investigación. Igual prohibición recaerá sobre su cónyuge y sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

El funcionario se inhibirá ante el Superintendente si se le comisiona para efectuar investigaciones relativas a empresas o personas, si ello compromete en cualquier forma su interés o si en ellas prestan servicios su cónyuge o alguno de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Igualmente se le aplicará el régimen de incompatibilidades previsto en el Capítulo II de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Capítulo II De sus atribuciones

ARTICULO 29.- La Superintendencia tendrá a su cargo la vigilancia y el control de las prácticas que impidan o restrinjan la libre competencia. Entre otras, tendrá las siguientes atribuciones:

- 1) Resolver las materias que tiene atribuidas por esta Ley;
- 2) Realizar las investigaciones necesarias para verificar la existencia de prácticas restrictivas de la competencia e instruir los expedientes relativos a dichas prácticas;
- 3) Determinar la existencia o no de prácticas o conductas prohibidas, tomar las medidas para que cesen e imponer las sanciones previstas en esta Ley;
- 4) Dictar las medidas preventivas, de oficio o a solicitud de interesados, para evitar los efectos perjudiciales de las prácticas prohibidas;
- 5) Otorgar las autorizaciones correspondientes en aquellos casos de excepción a que se refiere el Artículo 18 de esta Ley, siempre dentro de los límites de las normas que se dicten al efecto;
- 6) Proponer al Ejecutivo Nacional las reglamentaciones que sean necesarias para la aplicación de esta Ley;
- 7) Dictar su reglamento interno y las normas necesarias para su funcionamiento;
- 8) Emitir dictamen sobre los asuntos de su competencia cuando así lo requieran las autoridades judiciales o administrativas;

9) Crear y mantener el Registro de la Superintendencia; y

10) Cualesquiera otras que le señalen las leyes y reglamentos.

Capítulo III Del Registro de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia

ARTICULO 30.- La Superintendencia deberá llevar un Registro en el cual se inscribirán los siguientes actos:

- 1° Las investigaciones que se hubieren iniciado y los resultados obtenidos. En libro aparte, que será de uso reservado de la Superintendencia, se incorporarán los documentos aportados por los particulares que, por su contenido, deban permanecer bajo reserva;
- 2° Las medidas que se hubieren tomado en cada caso y las disposiciones previstas para asegurar su cumplimiento;
- 3° Cualquier otra resolución o decisión que afecte a terceros o a funcionarios de la Superintendencia; y
- 4° Las sanciones impuestas.

Capítulo IV Del Deber de Informar

ARTICULO 31.- Todas las personas y empresas que realicen actividades económicas en el país, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, deberán suministrar la información y documentación que les requiera la Superintendencia.

Los datos e informaciones suministrados, tendrán carácter confidencial, salvo si la Ley establece su registro o publicidad.

TÍTULO IV DEL PROCEDIMIENTO

Capítulo I Del Procedimiento en caso de Prácticas Prohibidas

ARTICULO 32.- El procedimiento se iniciará a solicitud de parte interesada o de oficio.

La iniciación de oficio sólo podrá ser ordenada por el Superintendente.

Cuando se presuma la comisión de hechos violatorios de las normas previstas en esta Ley, el Superintendente ordenará la apertura del correspondiente procedimiento e iniciará, por medio de la Sala de Sustanciación, la investigación o sustanciación del caso si éste fuere procedente.

ARTICULO 33.- Con excepción de las infracciones a las disposiciones de la Sección Tercera del Capítulo II del Título II de esta Ley, las cuales prescriben a los seis (6) meses, las demás infracciones prescriben al término de un (1) año.

La prescripción comenzará a contarse desde la fecha de la infracción; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que haya cesado la continuación o permanencia del hecho.

ARTICULO 34.- La Sala de Sustanciación practicará los actos de sustanciación requeridos para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades.

En ejercicio de sus facultades, la Sala de Sustanciación tendrá los más amplios poderes de investigación y fiscalización y, en especial, los siguientes:

- 1° Citar a declarar a cualquier persona en relación a la presunta infracción;
- 2° Requerir de cualquier persona la presentación de documentos o información que puedan tener relación con la presunta infracción;
- 3° Examinar, en el curso de las averiguaciones, libros y documentos de carácter contable; y
- 4° Emplazar, por la prensa nacional, a cualquier persona que pueda suministrar información en relación con la presunta infracción.

ARTICULO 35.- Durante la sustanciación del expediente y antes de que se produzca decisión, la Superintendencia podrá dictar las medidas preventivas siguientes:

- 1° La cesación de la presunta práctica prohibida; y
- 2° Dictar medidas para evitar los daños que pueda causar la supuesta práctica prohibida.

PARAGRAFO PRIMERO: Si las medidas preventivas han sido solicitadas por parte interesada, el Superintendente podrá exigirle la constitución de una caución para garantizar los eventuales daños y perjuicios que se causaren.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso que las mencionadas medidas preventivas pudieran causar grave perjuicio al presunto infractor, éste podrá solicitar al Superintendente la suspensión de sus efectos. En este caso, el Superintendente deberá exigir la constitución previa de caución suficiente para garantizar la medida.

ARTICULO 36.- Cuando en el curso de las averiguaciones aparezcan hechos que puedan ser constitutivos de infracción de esta Ley, la Sala de Sustanciación notificará a los presuntos infractores de la apertura del respectivo expediente administrativo, con indicación de los hechos que se investigan, concediéndoles un plazo de quince (15) días para que expongan sus pruebas y aleguen sus razones. En aquellos casos en que la Sala de Sustanciación lo estime necesario, podrá conceder una prórroga de quince (15) días. Cuando sean varios los presuntos infractores, el plazo señalado comenzará a contarse desde la fecha en que haya ocurrido la última de las notificaciones a que se refiere este Artículo.

ARTICULO 37.- Una vez transcurrido el plazo o la prórroga establecidos en el Artículo anterior, la Superintendencia deberá resolver dentro de un término de treinta (30) días.

ARTICULO 38.- En la resolución que ponga fin al procedimiento, la Superintendencia deberá decidir sobre la existencia o no de prácticas prohibidas por esta Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de que se determine la existencia de prácticas prohibidas, la Superintendencia podrá:

- 1° Ordenar la cesación de las prácticas prohibidas en un plazo determinado;
- 2° Imponer condiciones u obligaciones determinadas al infractor;
- 3° Ordenar la supresión de los efectos de las prácticas prohibidas; y
- 4° Imponer las sanciones que prevé esta Ley.

PARAGRAFO SEGUNDO: En la resolución que dicte la Superintendencia, debe determinarse el monto de la caución que deberán prestar los interesados para suspender los efectos del acto si apelasen la decisión, de conformidad con el Artículo 54.

PARAGRAFO TERCERO: La falta de pago de la multa o el pago efectuado después de vencido el plazo establecido para ello, causa la obligación de pagar intereses de mora hasta la extinción de la deuda, calculados éstos a la tasa del seis por ciento (6%) por encima de la tasa promedio de redescuento fijada por el Banco Central de Venezuela durante el lapso de la mora.

ARTICULO 39.- La decisión del Superintendente con respecto al artículo anterior, será notificada a los interesados.

ARTICULO 40.- Durante la sustanciación del procedimiento, los interesados tendrán acceso al expediente hasta dos (2) días antes de que se produzca la decisión definitiva, y podrán exponer sus alegatos, los cuales serán analizados en la decisión.

ARTICULO 41.- En todo lo no previsto en este Capítulo, el procedimiento se regirá conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Capítulo II Procedimiento para las Autorizaciones

ARTICULO 42.- En el otorgamiento de las autorizaciones que se prevén en esta Ley y para la decisión de los demás asuntos que no tengan establecido un procedimiento especial, se seguirá el procedimiento ordinario previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

TITULO V DE LAS SANCIONES

Capítulo I Disposiciones Generales

ARTICULO 43.- Las sanciones administrativas a que se refiere este Título, serán impuestas por la Superintendencia en la decisión definitiva que ponga fin al procedimiento.

Quando se efectúe la notificación de la resolución contentiva de la decisión a los infractores, será entregada la correspondiente planilla de liquidación de la multa impuesta a fin de que cancelen el monto en la oficina recaudadora correspondiente en el plazo de cinco (5) días después de vencido el término previsto en el Artículo 53.

ARTICULO 44.- Las sanciones previstas en este Título se aplicarán sin perjuicio de las establecidas en otras leyes.

ARTICULO 45.- Los autores, coautores, cómplices, encubridores e instigadores de hechos violatorios previstos en esta Ley, responderán solidariamente por las infracciones en que incurrieren.

ARTICULO 46.- Las sanciones que se apliquen, de conformidad con esta Ley, prescriben por el transcurso de cuatro (4) años, contados desde la fecha en que haya quedado definitivamente firme la resolución respectiva.

La acción para reclamar la restitución de lo pagado indebidamente por concepto de sanciones pecuniarias prescribe después de transcurrido el lapso de cuatro (4) años.

ARTICULO 47.- Cuando el sancionado no pague la multa dentro del plazo señalado en el único aparte del Artículo 43, se procederá de conformidad con el procedimiento para la ejecución de créditos fiscales previsto en el Código de Procedimiento Civil.

A tal efecto, constituirán título ejecutivo las planillas de liquidación de multas que se expidan de conformidad con el presente Título.

ARTICULO 48.- A falta de disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la legislación penal, compatibles con las materias reguladas por esta Ley.

Capítulo II De las Sanciones en Particular

ARTICULO 49.- Quienes incurran en las prácticas y conductas prohibidas señaladas en las Secciones Primera, Segunda y Tercera del Capítulo II del Título II de esta Ley, podrán ser sancionados por la Superintendencia con multa del diez por ciento (10%) del valor de las ventas del infractor, cuantía que podrá ser incrementada hasta el veinte por ciento (20%). En caso de reincidencia, la multa se aumentará a cuarenta por ciento (40%). El cálculo del monto de las ventas a las que se refiere este artículo, será el correspondiente al ejercicio económico anterior a la Resolución de la multa.

ARTICULO 50.- La cuantía de la sanción a que se refiere el Artículo anterior, se fijará atendiendo a la gravedad de la infracción, para lo cual se tendrá en cuenta:

- 1° La modalidad y alcance de la restricción de la libre competencia;
- 2° La dimensión del mercado afectado;
- 3° La cuota de mercado del sujeto correspondiente;
- 4° El efecto de la restricción de la libre competencia, sobre otros competidores efectivos o potenciales, sobre otras partes del proceso económico y sobre los consumidores y usuarios;
- 5° La duración de la restricción de la libre competencia; y
- 6° La reincidencia en la realización de las conductas prohibidas.

ARTICULO 51.- La Superintendencia podrá imponer, independientemente de las multas a que se refiere el Artículo 49, multas de hasta un millón de bolívares (Bs. 1.000.000,00), a aquellas personas que no cumplan las órdenes contenidas en las resoluciones dictadas por ella, todo de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 35 y 38. Estas multas podrán ser aumentadas sucesivamente en un cincuenta por ciento (50%) del monto original cada vez si en el lapso previsto no hubieren sido canceladas por el infractor.

ARTICULO 52.- Toda infracción a esta Ley y a sus reglamentos, no castigada expresamente, será sancionada con multa de hasta tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000,00), según la gravedad de la falta, a juicio de la Superintendencia.

TÍTULO VI DE LOS RECURSOS

ARTICULO 53.- Las resoluciones de la Superintendencia, agotan la vía administrativa y contra ellas sólo podrá interponerse, dentro del término de cuarenta y cinco (45) días continuos, el recurso contencioso-administrativo, de conformidad con la Ley de la materia.

ARTICULO 54.- Cuando se intente el recurso contencioso-administrativo contra resoluciones de la Superintendencia, que determinen la existencia de prácticas prohibidas, los efectos de las mismas se suspenderán si el ocurrente presenta caución, cuyo monto se determinará, en cada caso, en la resolución definitiva, de conformidad con el párrafo segundo del Artículo 38.

TÍTULO VII DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE ESTA LEY

ARTICULO 55.- Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo único de este Artículo, los afectados por las prácticas prohibidas, podrán acudir a los tribunales competentes para demandar las indemnizaciones por daños y perjuicios a que hubiere lugar, una vez que la resolución de la Superintendencia haya quedado firme.

PARAGRAFO UNICO: En caso de infracción de las disposiciones de la Sección Tercera del Capítulo II del Título II de esta Ley, los afectados podrán acudir directamente ante los tribunales competentes, sin necesidad de agotar la vía administrativa. Sin embargo, si los afectados decidieren iniciar el respectivo procedimiento administrativo, de conformidad con las disposiciones del Capítulo I del Título IV de esta Ley, no podrán demandar el resarcimiento de los daños y perjuicios que hubieren podido sufrir como consecuencia de prácticas prohibidas, sino después que la resolución de la Superintendencia haya quedado firme.

ARTICULO 56.- Las acciones por daños y perjuicios derivados de prácticas prohibidas por esta Ley, prescribirán:

- 1° A los seis (6) meses contados desde la fecha en que la resolución de la Superintendencia haya quedado firme; o
- 2° A los seis (6) meses para las infracciones a las disposiciones de la Sección Tercera del Capítulo

GACETA OFICIAL

DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA

DEPOSITO LEGAL p p 76-0002

AÑO CXIX — MES III

No. 4.353 Extraordinario

Caracas: lunes 30 de diciembre de 1991

Subscripción anual: Bs. 6.000,00 — Valor de cada ejemplar diario: Bs. 40,00

Ejemplares atrasados 30 por ciento de recargo.

Números Extraordinarios: Bs. 80,00 cada ejemplar hasta 32 páginas

Tarifa sujeta a Resolución Nro. 20 de fecha 28 de diciembre de 1990

Publicada en la Gaceta Oficial Nro. 34.624

Esta Gaceta contiene 8 páginas - Precio: Bs. 80,00

IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL

San Lázaro a Puente Victoria No. 89

Teléfonos: 572.03.57. — 576.12.72

II del Título II de esta Ley, en el caso de que no se iniciare el procedimiento administrativo del Capítulo I del Título IV de esta Ley. La prescripción comenzará a contarse desde la fecha en que se consumó la infracción; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que cesó la continuación o permanencia del hecho.

TITULO VIII DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 57.- Son nulos de nulidad absoluta, los actos o negocios jurídicos que tengan por causa u objeto las prácticas y conductas prohibidas en las Secciones Primera y Segunda del Capítulo II del Título II de esta Ley, siempre que no estén amparadas por las excepciones previstas en ellas.

ada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los trece días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y uno. Años 181º de la Independencia y 132º de la Federación.

EL PRESIDENTE.


PEDRO PARIS MONTESINOS

LEY DEL 22 DE JULIO DE 1941

Art. 11.—LA GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del 11 de octubre de 1872, continuará editándose en la Imprenta Nacional con la denominación GACETA OFICIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA.

Art. 12.—La GACETA OFICIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.

Parágrafo Único.—Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial.

Art. 13.—En la GACETA OFICIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquéllos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.

Art. 14.—Las Leyes, Decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.

EL VICEPRESIDENTE.


LUIS ENRIQUE OBERTO G.

LOS SECRETARIOS.


JOSE RAFAEL QUIROZ SERRANO


JOSE RAFAEL GARCIA-GARCIA

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y uno. Año 181º de la Independencia y 132º de la Federación.

Cúmplase.
(L.S.)


CARLOS ANDRÉS PÉREZ.

Refrendado.
La Ministra de Fomento,
(L.S.)

INELDA CISNEROS.

LAW TO PROMOTE AND PROTECT THE EXERCISE OF FREE COMPETITION

TITLE I GENERAL PROVISIONS

- ARTICLE 1: The objective of this Law is to promote and protect the exercise of free competition and the efficiency that benefits the producers and consumers; and to prohibit monopolistic and oligopolistic practices and other means that could impede, restrict, falsify, or limit the enjoyment of economic freedom.
- ARTICLE 2: The judicial ordinance of the Cartagena Agreement will apply when restrictive forces are imposed on free competition in the Sub-regional Andean market.
- ARTICLE 3: For the purposes of this law, economic freedom is understood as the right of all persons to devote themselves to the economic activity of their choice without any limitations but for those derived by the rights of others and those established by the Constitution and the laws of the Republic.

Economic activity is understood to be every instance of production or sales of goods and services directed towards obtaining economic gains.

Free competition is understood to be a situation characterized by exist adequate conditions which allow any economic agent, be it a supplier or buyer, to freely and enter and exit the market, and those that are in the market have the possibility either individually or through concerted action to impose any conditions on the exchange mechanism.

TITLE II SCOPE OF THE LAW

CHAPTER I Persons Subject to the Law

ARTICLE 4: Subject to this Law are all natural or juristic persons, public or private, engaged in profitable or non-profitable economic activities within the country, or group of agents engaged in such activities.

CHAPTER II Regulated Activities

SECTION I General Prohibition

ARTICLE 5: Conduct, practices, agreements, conventions, contracts, or decisions that impede, restrict, falsify, or limit free competition are prohibited.

SECTION II Specific Provisions

ARTICLE 6: Acts or conduct of agents not specifically protected by Law, that willfully impede or obstruct the entry or exit of firms, goods or services into any or all areas of the market are prohibited.

ARTICLE 7: Prohibited are all actions designed to restrict free competition, induce third parties to refuse to supply goods or services; obstruct access to goods or services; or refuse to sell raw materials or factor inputs or offer services to others.

ARTICLE 8: All conduct intended to manipulate factors of production, distribution, technological innovation, or investments in such a way as to be detrimental to free competition is prohibited.

ARTICLE 9: Agreements or conventions entered into directly or through unions, associations, federations, cooperatives, and other groups subject to this Law which restrict or impede competition between their members are prohibited.

Agreements or decisions taken in merchant or civil associations which are contrary to the ends previously mentioned are also prohibited.

ARTICLE 10: Agreements, decisions, collective recommendations or concerted activities are prohibited if they:

- 1° Fix, directly or indirectly, prices or other conditions essential to the sale or provision of goods or services;
- 2° Limit production, distribution, and the technical or technological development of investments;
- 3° Divide markets, geographical areas, supply sectors, or supply sources between competitors;
- 4° Impose unequal conditions, within any commercial or service transaction, for identical supplies provided that disadvantage one customer over others; and
- 5° Attach, to any contract, ancillary conditions that because of their nature or because of their accepted commercial use, exhibit no relation to the objective of the contract.

ARTICLE 11: Economic concentrations are prohibited, especially if they arise from the exercise of a single activity, when as a consequence of this activity free competition is restricted or a situation of dominance results in the market or in any part of the market.

ARTICLE 12: Contracts between persons subject to this Law, are prohibited insofar as they set prices and contractual terms for the sale of goods or provision of services to third parties, and are intended to have, or have, or may have the effect of restricting, falsifying, limiting, or impeding competition in all or part of the market.

ARTICLE 13: Abuse on the part of one or several persons subject to this law who hold a dominant position in all or part of the national market is prohibited, and in particular the following conduct is prohibited:

- 1° Price discrimination and other conditions of sales of services;
- 2° Unjustified limitations of production, distribution, or technical or technological development, harmful to firms or consumers;
- 3° The unjustified refusal to meet the demand of goods and services;
- 4° The imposition, in business and service relations, of unequal conditions for equivalent goods and services that disadvantage some competitors over others;
- 5° Attach, to any contract, ancillary conditions that because of their nature or because of their accepted commercial use, exhibit no relation to the

objective of the contract.

6° Others of equivalent effect.

ARTICLE 14: For the purposes of this law, a dominant position exists when:

- 1° A specific economic activity is conducted by a single person or a group of persons who are associated as buyers or as sellers or as either providers or purchasers of services; and
- 2° There exists more than one person conducting a specific type of activity but with no effective competition between them.

ARTICLE 15: Associated persons means the following:

- 1° Persons who own a share of 50 percent or more of the capital of the other or exercises any other form of control over that person;
- 2° Persons whose capital is 50 percent or more owned by the persons indicated in the preceding subparagraph, or who are subject to control by them; and
- 3° Persons who, in some form, are subject to the control of the persons described in the preceding subparagraphs.

SINGLE PARAGRAPH: Control means the possibility that one person has of exercising a decisive influence on the activities of one of the persons subject to this Law, be it either through the exercise of property rights or by the use of all or part of the assets of that person, or through the exercise of rights or contracts that permit a decisive influence on the membership, deliberations, or decisions of the bodies of said person or on their activities.

ARTICLE 16: For purposes of determining whether effective competition exists in a specific economic activity, it will be important to consider the following factors: The number of competitors participating in the respective activity, their share of the respective market, their installed capacity, demand for the respective product or service, technological innovation that affects the market, the actual and legal likelihood of potential competition in the future, and access by competitors to sources of financing and supply, as well as to distribution networks.

SINGLE PARAGRAPH: When the dominant position is derived from the Law, entities in this position shall be subject to the provisions of this Law unless specific conditions stipulated by the appropriate regulatory bodies dictate

otherwise, as in conformity with ARTICLE 97 of the Constitution.

SECTION III Unfair Competition

ARTICLE 17: The development of commercial policies which tend to eliminate competitors through unfair methods of competition are prohibited; especially in the following cases:

- 1° Misleading or false advertising directed to impede or limit free competition;
- 2° The promoting of products and services based on false declarations with regards to the disadvantages or risks of any other competitors' product or service; and
- 3° Bribery in commerce, the violation of industrial secrets and the pirating of products.

SECTION IV Exceptional Treatment

ARTICLE 18: The President of the Republic, in Council of Ministers, and having heard the opinion of the Superintendent for the Promotion and Protection of Free Competition shall determine the norms under which the following activities shall be allowed:

- 1° The fixing directly or indirectly, individually or in concerted action of bid or offer prices of any good or service;
- 2° The application, in commercial relations, of unequal conditions for equivalent or similar services that fashion inequities into the competitive process, especially if distinct from conditions which would be emerge naturally if there existed effective competition in the market, except in the case of discounts granted for prompt payment, volume discounts, less risk, and other conditions commonly found in commerce; and
- 3° Exclusive territory arrangements and franchises with exclusive dealership provisions.

SINGLE PARAGRAPH: In establishing the norms under which the activities indicated in the preceding subparagraphs may be conducted, the Executive Branch shall concurrently comply with the following:

- 1° Authorization of these activities, will have as objectives; contributing to production improvements, commercialization and distribution of goods and services, or promoting technical or economic progress;
- 2° The authorized activities must entail advantages for consumers or users;
- 3° Prior authorization of lawful activities, and control over their implementation, by the Office of the Superintendent; and
- 4° The authorization will contain the minimum required to achieve intended goals.

TITLE III THE OFFICE OF THE SUPERINTENDENT FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF FREE COMPETITION

CHAPTER I Its Internal Regulations

ARTICLE 19: The Office of the Superintendent for the Promotion and Protection of Free Competition with operational autonomy to act in matters within its competence, attached administratively to the Ministry of Development, is created.

ARTICLE 20: The Superintendency will be headquartered in the City of Caracas; however, if deemed necessary it will be able to establish offices in other cities.

ARTICLE 21: The Superintendency shall be administered by a Superintendent who shall be appointed by the President of the Republic.

ARTICLE 22: The Superintendent will have an Assistant, appointed by the President of the Republic. Both will exercise their office for (4) years, and they may be appointed to serve in future periods.

The Assistant shall assume Superintendent responsibilities during any absences.

In case of a permanent absence, the responsibilities of the Superintendent for the Defense of Free Competition and the Assistant Superintendent shall be assumed,

for the remainder of the term, by those designated by the President of the Republic.

ARTICLE 23: The Superintendent and the Assistant Superintendent must be over thirty (30) years of age, of recognized integrity and experienced in financial, economic, and commercial affairs related to the matters covered by this law.

SINGLE PARAGRAPH: The following persons may not be appointed to the offices of Superintendent or Assistant Superintendent:

- 1° Persons who have declared bankruptcy, and persons found guilty of offenses or misdemeanors against property, against the public faith or against public patrimony.
- 2° Persons related to the President of the Republic, the Minister of Development, or any member of the office of the Superintendent within the fourth degree of consanguinity or second degree of affinity, or who are spouses of any of them;
- 3° Debtors with delinquent bank or tax liabilities;
- 4° Members of political party directorates, while exercising their office;
- 5° Officials, directors, or employees of the natural or juristic persons subject to this law; and
- 6° Persons holding paid public office.

ARTICLE 24: The Superintendent and the Assistant Superintendent will not be removed from office except in the following instances:

- 1° In case of criminal conviction;
- 2° In case of a subsequent conflict of interest; and
- 3° For not complying with the duties of the office and for fully proven ineptitude.

ARTICLE 25: The Superintendent shall have a Tribunal [Sala de Sustanciación] which shall have the powers indicated by this Law, its Regulations, and the Internal Regulations of the Superintendency.

The Tribunal shall be under the Assistant Superintendent and shall have a staff

of professionals in sufficient number to ensure promptness in resolving matters within the competence of the Superintendency.

ARTICLE 26: The Superintendent may not perform any other functions, public or private, except academic and honorary functions which do not interfere with the carrying out his duties and functions.

ARTICLE 27: The appointment and removal of functionaries in the Superintendency shall be carried out by the Superintendent.

ARTICLE 28: Employees of the Superintendency who have investigated a firm, will not be able to work for said firm or any other firm with which that firm has a shareholder relationship, directly or indirectly, for one year following the investigation. The same prohibition shall apply to spouses and relatives to the fourth degree of consanguinity or second degree of affinity.

An official will disqualify himself if commissioned to investigate firms or persons, if that would involve, in any way, a conflict of interest, or if his spouse or any of his relatives to the fourth degree of consanguinity or second degree of affinity are employed by the firms or persons. The framework of incompatibility spelled out in CHAPTER II of the Organic Law of Administrative Procedures will also be applied.

CHAPTER II Its Powers

ARTICLE 29: The Superintendency shall be responsible for monitoring and controlling the practices that impede or restrict free competition. Among others, it shall have the following powers and duties:

- 1° To resolve matters assigned to it by this Law;
- 2° To conduct the investigations necessary to verify the existence of anticompetitive practices, and prepare case files concerning such practices;
- 3° To determine the existence or nonexistence of prohibited practices or conduct, act to proscribe them, and impose the penalties provided in this Law;
- 4° To adopt the necessary preventive measures, at its own initiative or at the request of a concerned party, to avoid the detrimental effects of the prohibited practices;
- 5° To authorize those practices or conduct in those exceptional cases to

which ARTICLE 18 refers to, and always within the limits which are in effect;

- 6° To propose to the Executive Branch the regulations necessary for the application of the law;
- 7° To issue its internal regulations and the rules necessary for its operation;
- 8° To issue an opinion on matters within its competence when so requested by the judicial or administrative authorities;
- 9° To create and maintain the Register of the Office of the Superintendent; and
- 10° Any other powers and duties indicated by the laws and regulations.

CHAPTER III

The Register of the Office of the Superintendent for the Defense of Free Competition

ARTICLE 30: The Superintendency will have to keep a Register in which the following actions are to be recorded:

- 1° The investigations that have been initiated and the results obtained. Documents furnished by individuals which should remain confidential shall be incorporated in a separate volume, which shall be reserved for use by the Superintendency;
- 2° Any measures that have been taken in each case and the provisions made to ensure compliance;
- 3° Any other decision affecting third parties or officials of the Superintendency; and
- 4° The sanctions imposed.

CHAPTER IV

The Duty to Inform

ARTICLE 31: All persons and firms conducting business in the country, public and private, Venezuelan and alien, must furnish the information and documentation required

of them by the office of the Superintendency.

The information and data supplied shall be confidential except when the Law provides for its registration or publication.

TITLE IV PROCEDURE

CHAPTER I Procedure in the Case of Prohibited Practices

ARTICLE 32: Proceedings shall be initiated at the request of a concerned party or at the initiative of the Office.

The initiation of proceedings may be ordered only by the Superintendent.

Whenever it appears that the rules provided for in this Law may have been violated, the Superintendent will order the opening of the corresponding proceeding, and shall initiate through the Tribunal the investigation of the case when appropriate.

ARTICLE 33: With the exception of violations of the provisions of Section III of Chapter II of Title II of this Law, which have a statute of limitations of six (6) months, the other violations <have a statute of limitations of one (1) year.

The statute of limitations shall begin to run from the date on which the violation was committed and, for repeated violations, from the day on which the last violation ceased.

ARTICLE 34: The Tribunal shall perform the necessary investigation to clarify the facts and determine responsibility.

In the exercise of its powers, the Tribunal shall have the broadest investigative and supervisory powers, and in particular the following powers:

- 1° To summon any person to appear to testify on pertinent matters related to the alleged violation;
- 2° To require any person to present any documents or information that may be related to the alleged violation;
- 3° During the investigation, to examine ledgers and documents; and
- 4° To subpoena any person, through the national press, to appear who may

be able to furnish information with respect to the alleged violation.

ARTICLE 35: During the hearing of the case file, and before its decision is handed down, the office Superintendent may adopt the following preventive measures:

- 1° It may order the alleged prohibited practice to cease; and
- 2° Dictate measures to avoid damages that may result from the alleged prohibited practice.

FIRST PARAGRAPH: If the preventive measures have not been solicited by the interested parties the Superintendent may demand a bond to guarantee any eventual damages that may result.

SECOND PARAGRAPH: If the measures are severely biased against the alleged violator, he will be able to petition the Superintendent to suspend the measures. In this case the Superintendent will have to demand the creation of a bond large enough to guarantee the measure.

ARTICLE 36: When in the course of investigations actions are uncovered that may constitute violations of this Law, the Tribunal shall notify the alleged violators that the respective administrative enquiry has been opened, indicate the alleged violations being investigated, and grant them a fifteen (15) day period within which to present their evidence and put forward their arguments. In those cases where the Tribunal deems it necessary, it will be able to give an extension of (15) days. In the case of several alleged violators, the aforementioned period shall begin to be counted from the date on which the last of the notifications referred to in this article was given.

ARTICLE 37: Once the period of time established in the preceding article has elapsed, the Superintendent will have a thirty (30) day period in which to issue a decision.

ARTICLE 38: In the decision that terminates the proceeding, the Superintendency will decide upon the existence or nonexistence of practices prohibited by this law.

FIRST PARAGRAPH: In case the existence of prohibited practices is determined, the Superintendent will be able to:

- 1° Order that the prohibited practices cease within a determined period of time;
- 2° Impose specific conditions or obligations on the violator;

- 3° Order the elimination of the effects arising from the prohibited practices;
and
- 4° Impose the penalties provided by this Law.

SECOND PARAGRAPH: In the resolution issued by the Superintendent there shall be a determination of the amount of the bond to be posted by the parties concerned in case of an appeal in conformity with ARTICLE 54.

- ARTICLE 39: The decision issued by the Superintendent relating to the preceding article shall be provided to the violators and parties concerned.
- ARTICLE 40: During the proceeding, and until the final decision is handed down, the parties concerned shall have up to two (2) days of advance access to the case file, and will be able to advance arguments which shall be taken into account.
- ARTICLE 41: In all that is not foreseen by this Chapter, the proceeding shall be governed by the provisions of the Organic Law on Administrative Proceedings.

CHAPTER II Procedure for Authorizations

- ARTICLE 42: In granting the authorizations provided for in this law, and for the resolution of other matters for which a special procedure has not been established, the regular procedure provided for in the Organic Law on Administrative Proceedings shall be followed.

TITLE V PENALTIES

CHAPTER I General Provisions

- ARTICLE 43: The administrative penalties referred to under this Title shall be imposed by the Superintendency in the final decision that terminates the proceeding.

When notification of the decision is given to the violators, the corresponding payment terms of the fine shall be delivered to them, so that the violators may proceed to pay the fine at the office of the Treasury within five (5) days following the period provided for in ARTICLE 53.

- ARTICLE 44: The penalties provided for in this Title shall be applied without prejudice to the penalties established in other laws.

ARTICLE 45: The authors, co-authors, accomplices, and instigators of acts in violation of this Law shall be responsible personally for the infractions they committed.

ARTICLE 46: The penalties imposed in conformity with this law shall become void by a statute of limitations after the elapse of four (4) years counting from the date of the definitive ruling.

Legal action to recover payments improperly made as monetary penalties shall become barred by statute of limitations by an equal period of four (4) years.

ARTICLE 47: When the person penalized does not pay the fine within the period indicated in the only separate paragraph of ARTICLE 43, action shall be taken in conformity with the procedure for the imposition of taxes and charges payable as spelled out in the Code of Civil Procedure.

For this purpose, the terms of payment for the fines issued in conformity with this Title shall become documents proving the plaintiff's right of execution.

ARTICLE 48: Absent special provisions in this Title, the principles and rules of penal law compatible with the nature and purposes of the matter governed by this law shall be substituted.

CHAPTER II Specific Penalties

ARTICLE 49: Persons involved in the prohibited practices and conduct indicated in Sections I, II, and III of Chapter II of Title II of this Law, may be punished by the Superintendency with a fine of up to ten percent (10%) of the value of the violator's sales, this quantity can be raised up to twenty percent (20%). In case of repeat offenders, the fine will be raised to forty percent (40%). The relevant sales figures to be used in this calculation will be based on data obtained before the resolution of the fine.

ARTICLE 50: The amount of the penalty referred to in the preceding article shall be established in keeping with the seriousness of the violation, for which purpose the following shall be taken account:

- 1° The form and scope of the restriction on free competition;
- 2° The size of the market affected;
- 3° The market share of the corresponding person subject to this Law;

- 4° The impact of the restriction of competition on other actual or potential competitors, on other parts of the economic process, and on consumers and users;
- 5° The duration of the restriction on free competition, and
- 6° The frequency of repeat offenses.

ARTICLE 51: The Superintendency may impose, independently of the penalties referred to in **ARTICLE 49**, fines up to one million Bolivars (Bs. 1,000,000), on those persons who do not comply with the orders contained in the decisions issued by the Superintendency in conformity with **ARTICLES 35** and **38**. These fines may be raised by fifty percent (50%) of the original amount for non-payment.

ARTICLE 52: All violations of this Law and its regulations not specifically penalized shall be punished by a fine of up to three million Bolivars (bs. 3,000,000.00) depending on the gravity of the offense, as judged by the Superintendent.

TITLE VI REMEDIES

ARTICLE 53: Decisions adopted by Superintendency exhaust the administrative route, and the only remedy that may be undertaken has to be finalized within the period of forty-five (45) calendar days. This remedy is the contentious-administrative appeal in conformity with the Law on that matter.

ARTICLE 54: When the administrative law appeal is being undertaken to review Superintendency resolutions that determined the existence of prohibitive practices, the effects of the resolutions shall be suspended if the appellant posts a bond. The amount of the bond shall be determined in each instance in the final decision, in conformity with the second paragraph of **ARTICLE 38**.

TITLE VII ACTIONS DERIVED FROM THIS LAW

ARTICLE 55: Without prejudice to what is indicated in the Single Paragraph of this **ARTICLE**, persons affected by the prohibited practices may turn to the competent courts to seek indemnification for damages that occurred, once the decision of the Superintendency is final.

SINGLE PARAGRAPH: In case provisions of Section III of Chapter II of Title II of this Law are violated, persons affected may turn directly to competent courts without need to exhaust administrative appeals. However, if the persons

affected decide to initiate the respective administrative proceeding in conformity with the provisions of Chapter I of Title IV of this Law, they may not demand redress for any damages they may have suffered as a consequence of the prohibited practices until after the decision of the Superintendency becomes final.

ARTICLE 56: Legal actions for damages derived from practices prohibited by this Law shall become barred by statute of limitations in:

- 1° Six (6) months counting from the date on which the resolution of the Superintendency became final.
- 2° Six (6) months for violations of the provisions of Section III of Chapter II of Title II of this Law, in the cases where the administrative proceeding of Chapter I of Title IV of this Law are not to be initiated. The statute of limitations shall begin to run from the date on which the infraction occurred; and, for repeated violations from the date on which the last violation occurred.

TITLE VIII FINAL DISPOSITIONS

ARTICLE 57: Legal business transactions which cause or result or are designed to foster practices prohibited by Sections I and II of this Chapter are null and void, provided they are not covered by the exceptions spelled out in this Law.

Presented, signed and sealed in the Legislative Federal Palace, in Caracas, on the thirteenth day of December of nineteen hundred and ninety one. 181st year of Independence and 132nd year of the Federation.

THE PRESIDENT,

PEDRO PARIS MONTESINO

THE VICE-PRESIDENT,

LUIS ENRIQUE OBERTO G.

THE SECRETARIES,

JOSE RAFAEL QUIROZ SERRANO

JOSE RAFAEL GARCIA-GARCIA